

Ayuntamiento
de Madrid



LEY DE CAPITALIDAD
Y DE RÉGIMEN ESPECIAL
DE MADRID

*ACT ON CAPITAL STATUS
AND SPECIAL REGIME
OF MADRID*

ÍNDICE GENERAL

Presentación..... 7

LEY 22/2006, DE 4 DE JULIO, DE CAPITALIDAD Y DE RÉGIMEN ESPECIAL DE MADRID

Sumario 15

Presentation..... 65

ACT ON CAPITAL STATUS AND SPECIAL REGIME OF MADRID

Summary 73

Índice analítico 121

PRESENTACIÓN

I

La Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid que en estas páginas se edita viene a ser la primera que aborda conjuntamente dos realidades diferentes pero que convergen simultáneamente en la ciudad de Madrid: por un lado, el hecho de ser el núcleo urbano más poblado de España; por otro, el de acoger la capital del Estado.

Sin embargo, no es la primera vez que se debate sobre la necesidad de una norma de estas características, ni tampoco la primera que se aprueba una ley singular para Madrid. No obstante, esta vez se da un salto cualitativo importante al tratarse de forma conjunta en un único texto normativo esos dos hechos diferenciales de Madrid.

Para cobrar conciencia de ese valor añadido, resulta procedente atender tanto al desarrollo histórico de este aspecto, como a las experiencias más cercanas dentro de nuestro entorno europeo inmediato.

Por lo que se refiere a este último, cabe señalar que París cuenta con una ley especial que se aplica también a Lyon y Marsella. En el caso de Berlín concurre una circunstancia especial, pues esta ciudad, junto con Bremen y Hamburgo, tienen el estatuto de ciudad Estado. Roma no cuenta todavía con un estatuto singular, si bien la reforma constitucional de 2001 se refiere de forma expresa al mismo.

II

Madrid es capital de España desde que en mayo de 1561 Felipe II decide trasladar a ella la Corte. Mucho más recientemente, es confirmada en esa condición por la Constitución de 1931, cuyo artículo 5 declaraba que «*la capitalidad de la República se fija en Madrid*», elevando ese hecho a asunto de interés prioritario para el Estado.

Así, será el propio Presidente de la República, Manuel Azaña, quien más adelante afirme que no hay Estado ni Nación española sin una capital dinámica:

«Si Madrid no existiera sería preciso inventar –digámoslo así– la Capital federal de la República española, ya que Madrid es el centro... donde vienen a concentrarse todos los sentimientos de la Nación, donde surgen y rebotan a todos los ámbitos de la Península las ideas, saturadas y depuradas por la vida madrileña en todos sus aspectos.»

Posteriormente, en 1932, se otorga a Madrid, mediante ley, una subvención de 80 millones de pesetas, distribuidos en diez anualidades y destinados exclusivamente a la ejecución de obras y servicios públicos. El preámbulo de la proposición de ley señalaba lo siguiente:

«Omitimos, por innecesario, el señalamiento de los grandes desembolsos a que conducen al Ayuntamiento, capital de España, los actos obligados con ocasión de las visitas a España de jefes de Estado extranjeros y de los Congresos nacionales e internacionales de todos órdenes que tienen lugar en Madrid, atendiendo la Corporación municipal debidamente y cual corresponde al decoro de la Nación con los recursos ordinarios de su presupuesto, que tienen por tal concepto una importante merma de los que podría dedicar a servicios puramente locales.»

Este interés por la capital se hace constar también en la Ley Municipal de 1935, cuyo artículo 4 permitía la clasificación de los municipios atendiendo a su población, sus recursos, las especiales modalidades de los servicios indispensables y sus condi-

ciones de vida, y precisaba, además, que *el de la Capital de la República tiene categoría propia, y su régimen y gobierno pueden ser objeto de Ley especial*. Esta ley no llegó a aprobarse hasta 1963, cuando lo hizo bajo la habilitación contenida en la Ley Municipal de 1955.

También durante el periodo 1936-1978 se desarrollaron importantes acciones para hacer de Madrid una gran ciudad y ensalzar su función de capital del Estado. En esta etapa se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de 1941 que tiene como consecuencia la expansión de la ciudad con la anexión de los municipios limítrofes –fenómeno que también se produce en Barcelona, Valencia y Bilbao–, con lo que Madrid pasa de ser una ciudad de 66 kilómetros cuadrados a una gran ciudad de 607. En este Plan se expresaban las siguientes ideas:

«La capitalidad nacional ha sido la base del engrandecimiento de Madrid, y sigue constituyendo en la actualidad su función primordial. Urbanísticamente requiere la preparación de los espacios adecuados para las edificaciones y los actos propios de la capital con el rango necesario y el cuidado especial de todos los valores de tipo tradicional que puedan acrecentar la espiritualidad de la ciudad. La capitalidad supone también la responsabilidad de constituir modelo y ejemplo para la ordenación y desarrollo de las demás ciudades españolas.»

La Ley de Régimen Local de 1955 habilitó a la aprobación de regímenes singulares para las grandes ciudades y a la ruptura del uniformismo característico de nuestro régimen local. En concreto, se refería a la posibilidad de que el Gobierno aprobase con carácter de Ley un régimen especial orgánico y económico para Madrid y Barcelona, así como para otras ciudades cuyo número de habitantes e importancia de sus problemas también lo aconsejara (artículo 94.2, adicionado por la Ley de 7 de noviembre de 1957).

En aplicación de esa Ley se aprobaron dos normas específicas para Madrid: el Decreto 1674/1963, de 11 de julio, del Texto Articulado de la Ley Especial de Madrid; y la Ley 121/1963, de 2 de diciembre, del Área Metropolitana de Madrid.

La exposición de motivos de la Ley Especial de Madrid de 1963 precisaba:

«Promúlgase ahora el texto articulado de la Ley especial para Madrid, resultado de una laboriosa gestación, que pone de manifiesto la prudencia del régimen al enfrentarse con los delicados aspectos que ofrece la administración municipal madrileña, como consecuencia de ser, además del Municipio más populoso de la Nación, la Capital del Estado y sede del Gobierno nacional».

No obstante, el análisis del contenido de esta norma permite afirmar que la misma establece una regulación particular para Madrid fundamentada principalmente en el hecho de gran ciudad, como antes lo había hecho la Ley Especial de Barcelona aprobada en 1960, de manera que las referencias a la capitalidad se reducían a la declaración de Madrid como capital del Reino (artículo 1.1) y al reconocimiento de determinadas prerrogativas: preeminencia honorífica respecto de los demás municipios; escudo; y la posibilidad de impugnar las decisiones municipales sólo mediante recurso de alzada (artículo 2). Tampoco esta Ley estableció un régimen especial de financiación para compensar los gastos y cargas que Madrid soporta por ser la Capital del Estado, a pesar de que el borrador del Proyecto pretendió dotar a Madrid de una subvención especial equivalente a un cinco por mil del Presupuesto General del Estado.

III

Éstas y otras medidas legislativas que se adoptaron después de 1963 ciertamente dotaron a Madrid de nuevos recursos y de herramientas jurídicas para el desarrollo y fortalecimiento de esta gran ciudad que es la capital que representa a España y a todos los españoles. Pero en este proceso las normas jurídicas siempre se quedan cortas, nunca responden verdaderamente a las necesidades que demanda el hecho de ser la cabeza visible del Estado.

Además, el régimen de libertades del que los españoles se dotaron en 1978 tenía todavía pendiente el desarrollo de lo que en etapas anteriores de nuestra historia había sido objeto de atención

del legislador. Así, la Constitución proclama en su artículo 5 que «*la capital del Estado es la Villa de Madrid*», mientras el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid declara en su artículo 6 que Madrid, por su condición de capital del Estado y sede de las instituciones generales, tendrá un régimen especial aprobado por Ley de las Cortes Generales.

Hoy, en un tiempo de plena madurez democrática, tenemos ya aprobada esta Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, que sin duda nos ofrece otro importante repertorio de facultades para continuar el proceso de desarrollo y mejora de la ciudad. Facultades que no son otra cosa que instrumentos con los que ejercer con mayor eficacia e intensidad el servicio a todos los españoles que como capital de la Nación constituye el verdadero sentido de Madrid.

Alberto Ruiz-Gallardón
Alcalde de Madrid

**LEY 22/2006, DE 4 DE JULIO,
DE CAPITALIDAD Y DE RÉGIMEN
ESPECIAL DE MADRID**

(BOE 5 julio 2006)
(Corrección de errores en el BOE 26 julio 2006)

SUMARIO

PREÁMBULO	19
TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES	25
Artículo 1. <i>Objeto de la Ley</i>	25
Artículo 2. <i>Autonomía municipal.....</i>	25
TÍTULO I. RÉGIMEN DE CAPITALIDAD	26
Artículo 3. <i>Relaciones entre las instituciones estatales, autonómicas y locales en la ciudad de Madrid</i>	26
Artículo 4. <i>Régimen de capitalidad de la Villa de Madrid</i>	27
Artículo 5. <i>Comisión Interadministrativa de Capitalidad</i>	27
Artículo 6. <i>Presidencia de la Comisión Interadministrativa de Capitalidad.....</i>	27
TÍTULO II. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	28
CAPÍTULO I. GOBIERNO MUNICIPAL.....	28
SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES	28
Artículo 7. <i>Organización.....</i>	28
Artículo 8. <i>Fuero</i>	28
SECCIÓN SEGUNDA. EL PLENO.....	28
Artículo 9. <i>El Pleno</i>	28
Artículo 10. <i>Presidente del Pleno.....</i>	29

Artículo 11.	<i>Atribuciones del Pleno</i>	30
Artículo 12.	<i>Atribuciones de las Comisiones</i>	32
Artículo 13.	<i>Secretaría General del Pleno</i>	32
SECCIÓN TERCERA. ÓRGANOS EJECUTIVOS DE GOBIERNO.....		33
Artículo 14.	<i>Alcalde</i>	33
Artículo 15.	<i>Los Tenientes de Alcalde</i>	35
Artículo 16.	<i>Junta de Gobierno</i>	35
Artículo 17.	<i>Atribuciones de la Junta de Gobierno</i>	36
Artículo 18.	<i>Estatuto de los titulares y miembros de los órganos ejecutivos de dirección política y administrativa</i>	38
CAPÍTULO II. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		38
Artículo 19.	<i>Principios generales</i>	38
Artículo 20.	<i>Organización administrativa</i>	39
Artículo 21.	<i>Órganos directivos</i>	39
Artículo 22.	<i>Los Distritos</i>	39
Artículo 23.	<i>Intervención General</i>	40
Artículo 24.	<i>Tesorería</i>	40
Artículo 25.	<i>Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid</i>	40
Artículo 26.	<i>Ente autónomo de gestión tributaria</i>	42
Artículo 27.	<i>Órgano para la defensa de los derechos de los vecinos</i>	42
Artículo 28.	<i>Asesoría Jurídica</i>	43
Artículo 29.	<i>Representación y defensa en juicio de autoridades y empleados públicos</i>	44
Artículo 30.	<i>Especialidades procesales</i>	44
TÍTULO III. COMPETENCIAS MUNICIPALES		45
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES		45
Artículo 31.	<i>Régimen general de competencias</i>	45
Artículo 32.	<i>Competencias municipales</i>	45
Artículo 33.	<i>Competencias propias</i>	45
Artículo 34.	<i>Competencias delegadas y encomienda de gestión</i>	45
CAPÍTULO II. SEGURIDAD PÚBLICA.....		46
Artículo 35.	<i>Competencias en materia de seguridad pública</i>	46
Artículo 36.	<i>Participación del Estado en la Junta Local de Seguridad de Madrid</i>	46

CAPÍTULO III. PARTICIPACIÓN EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	47
Artículo 37. <i>Participación del Ayuntamiento en la gestión de infraestructuras, servicios y equipamientos.....</i>	47
CAPÍTULO IV. SEGURIDAD VIAL.....	47
Artículo 38. <i>Ámbito material de aplicación de las competencias del Ayuntamiento de Madrid en materia de movilidad ..</i>	47
Artículo 39. <i>Ordenación local del tráfico</i>	48
Artículo 40. <i>Competencias en materia de seguridad vial</i>	49
Artículo 41. <i>Medidas cautelares</i>	50
Artículo 42. <i>Gestión del cobro de las sanciones en materia de circulación</i>	52
Artículo 43. <i>Distintivos de los vehículos</i>	52
Artículo 44. <i>Personal auxiliar de la policía municipal</i>	53
Artículo 45. <i>Ordenación del tráfico.....</i>	53
Artículo 46. <i>Embargo de los vehículos.....</i>	53
CAPÍTULO V. BIENES INMUEBLES	54
Artículo 47. <i>Desafectación de inmuebles del Estado.....</i>	54
TÍTULO IV. RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO.....	54
Artículo 48. <i>Procedimiento de aprobación de las normas de competencia del Pleno</i>	54
Artículo 49. <i>Procedimiento de aprobación del Presupuesto</i>	56
Artículo 50. <i>Práctica de notificaciones</i>	57
Artículo 51. <i>Boletín de la Ciudad de Madrid y tablón de edictos ..</i>	57
Artículo 52. <i>Medidas para el cumplimiento de la legalidad</i>	58
Artículo 53. <i>Fin de la vía administrativa</i>	58
Artículo 54. <i>Remisión de acuerdos</i>	59
Artículo 55. <i>Funciones de fe pública</i>	59
Disposición adicional primera. <i>Constitución de la Comisión Interadministrativa de Capitalidad</i>	59
Disposición adicional segunda. <i>Competencias municipales y legislación sectorial</i>	59
Disposición adicional tercera. <i>Instalación subterránea de las redes de servicios públicos y de interés general</i>	60
Disposición adicional cuarta. <i>Regulaciones específicas</i>	60

Disposición adicional quinta. <i>Tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad</i>	60
Disposición adicional sexta. <i>Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana</i>	61
Disposición adicional séptima	61
Disposición transitoria primera. <i>Adecuación a las previsiones contenidas en la presente Ley</i>	61
Disposición transitoria segunda. <i>Régimen de incompatibilidades</i>	61
Disposición derogatoria única. <i>Derogación normativa</i>	62
Disposición final primera. <i>Habilitación competencial.....</i>	62
Disposición final segunda. <i>Entrada en vigor.....</i>	62

PREÁMBULO

I

Madrid es la capital del Estado según el artículo 5 de la Constitución. Y es, en términos demográficos, la ciudad más poblada de España, centro de una extensa área metropolitana: en ella residen algo más de tres millones de personas, sin contar los otros cientos de miles que transitan diariamente por la ciudad. Estas singularidades, tanto institucionales como sociales, se encuentran estrechamente entrelazadas: la realidad de Madrid como gran ciudad es indisoluble de su condición de capital del Estado.

Las singularidades de Madrid reclaman un tratamiento legal especial que haga posible un gobierno municipal eficaz. Ese es el objeto de la presente Ley. Con ese fin se aborda un tratamiento integrado de los distintos factores que singularizan a Madrid, tanto de los que derivan de su condición capitalina como de los que provienen de su condición de gran ciudad. De esta manera, la presente Ley desarrolla las previsiones establecidas al respecto tanto por el texto constitucional, como por el propio Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

En efecto, el artículo 6 del Estatuto de la Comunidad de Madrid prevé que, por su doble condición de capital del Estado y sede de las instituciones generales, la villa de Madrid tendrá un

régimen especial, regulado por Ley votada en Cortes, que determinará las relaciones entre las instituciones estatales, autonómicas y municipales en el ejercicio de sus respectivas competencias. Pero más allá, la Ley incluye otras normas especiales encaminadas a hacer posible el gobierno eficaz de una urbe de las dimensiones y problemas propios de Madrid, sin par en el resto de España.

La regulación especial de la ciudad de Madrid no es, con todo, una novedad jurídica. En 1963 se aprobó, por primera vez, un régimen especial para Madrid con el que se trató de dar respuesta, como señala la exposición de motivos del Decreto 1674/1963, de 11 de julio, a los delicados aspectos que ofrece la administración municipal madrileña, como consecuencia de ser, además del Municipio más populoso de la nación, la capital del Estado y sede del Gobierno nacional.

La singularidad de Madrid tampoco pasó inadvertida a la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local. En la disposición adicional sexta de esta Ley ya se prevé la sustitución del régimen especial aprobado en 1963 por otro actualizado. A través de esta Ley se da cumplimiento a las previsiones legales anteriormente mencionadas.

Obvio es que la presente Ley no recoge todo el régimen jurídico de la ciudad de Madrid. Contiene únicamente normas especiales que se aplicarán preferentemente respecto de las previstas en la legislación general. De otro lado, las normas especiales de la presente Ley no cuestionan el ejercicio de las competencias legislativas sobre régimen local de la Comunidad de Madrid.

La presente Ley se estructura en cuatro títulos, precedidos de un título preliminar, en los que se regulan el régimen de capitalidad, la organización política y administrativa del Ayuntamiento de Madrid, las competencias de titularidad del Estado que se transfieren y las especialidades del régimen jurídico aplicable a la ciudad.

II

El título I da cumplimiento propiamente al régimen derivado de la condición de Madrid como capital del Estado, creando la denominada «Comisión Interadministrativa de Capitalidad», co-

mo órgano de cooperación entre el Estado, la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid en materias directamente relacionadas con el hecho de la capitalidad, tales como la seguridad ciudadana o la celebración de actos oficiales.

De este modo, la Ley delimita las materias de competencia de dicha Comisión, si bien deja abierta la posibilidad de que las tres instituciones que la integran puedan ampliar en el futuro su ámbito de colaboración y de consenso en aspectos relacionados con la capitalidad. Se establece así un modelo abierto de cooperación que permitirá adaptar la función de la Comisión a las nuevas demandas y facilitará la adopción de respuestas adecuadas a las complejas necesidades de la ciudad.

El valor de este destacado instrumento de cooperación consiste en definir un marco legal de cooperación entre las tres Administraciones que permita asegurar el bienestar y la calidad de vida de los madrileños.

Asimismo, la presente norma viene a recoger la previsión constitucional de que Madrid es la capital del Estado, reconociendo expresamente esa realidad histórica, y asignándole las funciones propias de dicha condición.

III

El título II aborda los aspectos esenciales de la organización del Ayuntamiento de Madrid en cuanto parte imprescindible del estatuto de la ciudad-capital del Estado.

El modelo de la organización política y administrativa del Ayuntamiento de Madrid contenido en este título viene a desarrollar el establecido en el título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, es decir, no se opta por un modelo diferente del vigente, sino que se parte de éste perfilándose algunos aspectos e introduciéndose algunas singularidades.

Esta regulación se fundamenta en dos principios. Por un lado, se refuerza el esquema de corte parlamentario del gobierno local, que se concreta, entre otras, en una más clara separación entre el Pleno y el ejecutivo local, en el reforzamiento de las funciones del ejecutivo y en el reconocimiento de la debida separación entre el gobierno y la administración municipal. Por otro lado, se

amplía el ámbito de materias que pueden ser objeto de las potestades normativas y de autoorganización municipal –elementos fundamentales de la autonomía local–, al eludir deliberadamente la regulación de los aspectos secundarios de la organización administrativa por tratarse de una materia que ha de quedar reservada a la libre disposición del Ayuntamiento.

Respecto de la organización política, formada principalmente por el Pleno, el Alcalde y la Junta de Gobierno, se introducen algunas especialidades que no alteran la naturaleza o la posición que cada uno de esos órganos ostenta en el gobierno municipal, ni tampoco sus funciones principales, y con las que se pretende perfilar el régimen de estos órganos en la línea propia de un sistema de corte parlamentario.

Destaca la facultad que se otorga al Alcalde para proponer al Pleno la designación, entre los Concejales, de su Presidente y Vicepresidente. Asimismo, se ordenan las competencias del Pleno a fin de reforzar las referentes al debate de las grandes decisiones estratégicas, el control político y la potestad normativa, trasladándose a la Junta de Gobierno las funciones de carácter ejecutivo que por razones de eficacia y coherencia con el sistema de gobierno parlamentario deben estar atribuidas a ese órgano. El Pleno mantiene todas las competencias relevantes que ha venido ejerciendo tradicionalmente: aprobación de los presupuestos generales y de las modificaciones sustanciales del mismo, del planeamiento urbanístico, de la normativa municipal; las competencias referentes a la delimitación y alteración del término municipal, la participación en organizaciones supramunicipales, la aceptación de las delegaciones de competencias de otras Administraciones públicas; y finalmente las competencias de control político que se extienden a todo el ámbito de la actuación municipal, atribuyéndose al Pleno la concreción de las modalidades de control por parte de los Concejales y de los grupos políticos, así como el acceso a la información administrativa que precisen para el desarrollo de su función representativa.

La reordenación de las competencias del Pleno y los principios que la fundamentan explican también los cambios en las competencias del Alcalde. En general, al Alcalde corresponde, como competencias principales, el impulso de la política municipal, la

dirección de los demás órganos ejecutivos y la superior dirección de la administración ejecutiva municipal y, por supuesto, responde de su gestión en el Pleno.

La necesidad de que las grandes ciudades cuenten con un ejecutivo fuerte, dotado de capacidad gerencial, exige que la Junta de Gobierno se configure como el máximo órgano colegiado de la función ejecutiva y de la gestión administrativa. Por ello las competencias de esta naturaleza atribuidas por la legislación vigente al Pleno y al Alcalde se trasladan a la Junta de Gobierno.

Finalmente, el título II establece una clara diferenciación entre los órganos superiores del Ayuntamiento: Alcalde, Junta de Gobierno y Concejales miembros de ésta, a los que corresponden las funciones de dirección política y de cuya gestión responden ante el Pleno, y la Administración municipal a la que corresponde servir con objetividad al interés general –artículo 103 de la Constitución– bajo la dirección de los órganos políticos y el necesario control del Pleno.

IV

El título III aborda la regulación general de las distintas formas de atribución de las competencias a la ciudad, diferenciándose entre competencias propias, delegadas y las atribuidas mediante la técnica de la encomienda de gestión. Asimismo, se determinan las competencias de titularidad estatal que se asignan a la ciudad a través de esta Ley.

De conformidad con lo previsto en la Carta Europea de Autonomía Local y en la normativa básica estatal, las competencias propias se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones públicas.

La ciudad de Madrid podrá ejercer por delegación competencias de la Administración General del Estado y de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación en cada caso.

La Ley se refiere también a la posibilidad de encomendar a la ciudad de Madrid la realización de tareas jurídicas, técnicas o

materiales, por parte del Estado o de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.

Por otro lado, se atribuyen a la ciudad de Madrid determinadas competencias de titularidad estatal en materia de movilidad, seguridad ciudadana e infraestructuras, por tratarse de ámbitos relevantes de la gestión y gobierno de la misma.

Así, en materia de infraestructuras, se reconoce la participación del Ayuntamiento de Madrid en aquéllas cuya titularidad corresponda a la Administración General del Estado y estén ubicadas en su término municipal.

En este proceso de ampliación de las competencias municipales en sectores con elevada incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos ocupa una posición central las medidas previstas en materia de seguridad vial, dirigidas a incrementar las potestades del Ayuntamiento para afrontar problemas como la emisión de ruidos y contaminantes por los vehículos a motor, el estacionamiento, la conducción bajo los efectos del alcohol o estupefacientes o sustancias psicotrópicas, la mejora de las condiciones de vida de las personas con movilidad reducida, etc. Para la efectividad de las medidas, se permite al Ayuntamiento adoptar una serie de medidas cautelares, que incrementarán el poder de autoridad del mismo para el cumplimiento de las normas sobre seguridad vial.

V

El título IV aborda la regulación de las especialidades del régimen jurídico de la ciudad de Madrid, que se justifican por la dimensión de la actividad administrativa que genera el Ayuntamiento de Madrid.

Madrid es la ciudad de mayor población de España y esto hace que el volumen de su actividad administrativa no sea equiparable a la de ningún otro municipio. Partiendo de este dato objetivo, lo que se pretende con estas especialidades es introducir rapidez y agilidad en la gestión, reforzando la eficacia de la actuación administrativa.

En materia de procedimientos administrativos se definen los trámites principales del procedimiento para la aprobación de las normas municipales por el Pleno, con el objetivo de agilizarlo

respecto a la regulación actual, que contiene una doble aprobación por el Pleno municipal. En particular, en este nuevo procedimiento se diferencia la tramitación del proyecto normativo por el ejecutivo municipal de la tramitación en el seno del Pleno. En la primera se realizará un trámite de audiencia a los ciudadanos cuando el proyecto afecte a los derechos o intereses legítimos de los mismos, y finaliza con su aprobación por la Junta de Gobierno. La tramitación del proyecto en el Pleno se inicia con la remisión del mismo y los antecedentes a la Comisión competente que lo dictaminará y elevará al Pleno para su aprobación en un acto único.

Por último, la parte final de la norma tiene por objeto asegurar la puesta en funcionamiento de la Comisión Interadministrativa de Capitalidad, regular las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad o establecer el régimen transitorio en materia de incompatibilidades.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente Ley regula el régimen especial de la Villa de Madrid así como las peculiaridades del mismo en cuanto capital del Estado y sede de las instituciones generales, sin perjuicio de las competencias de la Comunidad de Madrid.

2. En las materias no reguladas en la presente Ley, será de aplicación a la ciudad de Madrid:

a) Lo dispuesto en la legislación estatal básica en materia de gobierno y administración local, y, en su caso, en la legislación autonómica de desarrollo.

b) La restante legislación del Estado y de la Comunidad de Madrid, en función de la distribución constitucional y estatutaria de competencias.

Artículo 2. Autonomía municipal.

1. La Ciudad de Madrid goza de autonomía para la gestión de sus intereses, con medios económico-financieros suficientes.

cientes conforme a la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y el resto del ordenamiento jurídico. La gestión municipal autónoma se desarrolla con lealtad institucional y en colaboración, cooperación y coordinación con la Administración General del Estado y de la Comunidad de Madrid.

2. El Gobierno y la Administración de la ciudad de Madrid comprende las funciones de ordenación y ejecución en los asuntos de la competencia municipal. Estas funciones se ejercen por el Ayuntamiento, bajo su propia responsabilidad y en el marco de las Leyes, mediante órganos diferenciados para las de ordenación y las de ejecución y gestión.

3. Para la efectividad de la autonomía prevista en el apartado 1, la presente Ley atribuye al Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid competencias en materia de infraestructuras, movilidad, seguridad ciudadana y régimen jurídico y procedimiento. De igual forma, y según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la legislación sectorial del Estado atribuirá, en su caso, competencias en el ámbito de los servicios e infraestructuras que sean básicos para el desarrollo de la Ciudad.

TÍTULO I Régimen de capitalidad

Artículo 3. Relaciones entre las instituciones estatales, autonómicas y locales en la ciudad de Madrid.

1. De acuerdo con el artículo 5 de la Constitución Española, que establece que la capital del Estado es la Villa de Madrid, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, el presente título regula la articulación de las relaciones entre las Instituciones estatales, autonómicas y locales en el ámbito territorial de la ciudad de Madrid, en aquellos aspectos vinculados con la capitalidad.

2. En lo no previsto en este título, las relaciones interadministrativas en el ámbito territorial de la ciudad de Madrid se desarrollarán con arreglo a los principios establecidos en la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la legislación básica sobre el gobierno y la administración local, así como en la restante legislación estatal o autonómica de aplicación.

Artículo 4. Régimen de capitalidad de la Villa de Madrid.

El régimen de capitalidad de la Villa de Madrid a que se refiere el presente título tendrá como objeto las siguientes materias:

a) Seguridad ciudadana siempre que esté inmediatamente relacionada con la protección de personas y bienes en acontecimientos internacionales o nacionales que se celebren en Madrid en su condición de capital del Estado.

b) La coordinación en la organización y celebración de actos oficiales de carácter estatal.

c) La protección de personas y bienes como consecuencia del ejercicio por los ciudadanos del derecho de reunión y de manifestación cuando el ámbito de la convocatoria presente dimensión estatal.

d) Régimen protocolario de la Villa de Madrid y de sus representantes políticos.

e) Cualquier otra materia que pudiera afectar relevantemente a las tres Administraciones, a juicio de las mismas, como consecuencia de la capitalidad de Madrid.

Artículo 5. Comisión Interadministrativa de Capitalidad.

1. Respetando los ámbitos competenciales de las distintas administraciones participantes, se crea la Comisión Interadministrativa de Capitalidad, como órgano de cooperación para la mejor articulación del régimen de capitalidad previsto en esta Ley.

2. La Comisión Interadministrativa de Capitalidad estará formada por igual número de miembros de las tres administraciones.

Artículo 6. Presidencia de la Comisión Interadministrativa de Capitalidad.

1. La presidencia de la Comisión Interadministrativa de Capitalidad corresponde al Estado.

2. Su composición y funcionamiento se determinará en su Reglamento, que se aprobará por unanimidad de sus miembros.

TÍTULO II Gobierno y Administración municipal

CAPÍTULO I Gobierno municipal

SECCIÓN PRIMERA *Disposiciones generales*

Artículo 7. *Organización.*

Son órganos de gobierno municipal:

- a) Deliberante de representación política: el Pleno.
- b) Ejecutivos de dirección política y administrativa: el Alcalde, la Junta de Gobierno, los Tenientes de Alcalde, los Concejales con responsabilidades de gobierno, los miembros no electos de la Junta de Gobierno y los que se determinen en el correspondiente Reglamento orgánico.

Artículo 8. *Fuero.*

La responsabilidad penal del Alcalde, los Tenientes de Alcalde y restantes Concejales del Ayuntamiento de Madrid, así como la civil en que pudieran haber incurrido los mismos con ocasión del ejercicio de sus cargos, será exigible conforme a lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SECCIÓN SEGUNDA *El Pleno*

Artículo 9. *El Pleno.*

1. El Pleno es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal, ejerce las atribuciones que le están asignadas expresamente y está formado por el Alcalde y los Concejales, sin perjuicio de la asistencia a sus sesiones y la intervención en sus deliberaciones de los miembros no electos de la Junta de Gobierno.

2. Las sesiones del Pleno son públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.

El Pleno puede funcionar en Comisiones, que estarán formadas por los Concejales que designen los grupos políticos en proporción a su representación en el Pleno.

3. En todo lo no previsto en esta Ley en lo que se refiere a su convocatoria, constitución, funcionamiento y adopción de acuerdos, el Pleno se rige, en el marco de lo dispuesto por la legislación estatal básica en materia de gobierno y administración local, por su Reglamento Orgánico y las Resoluciones dictadas por su Presidente en interpretación de éste.

Artículo 10. Presidente del Pleno.

1. El Alcalde convoca y preside las sesiones del Pleno. No obstante, podrá promover la designación por el Pleno de un Presidente y un Vicepresidente de acuerdo con lo que se dispone en el apartado siguiente.

2. A iniciativa del Alcalde el Pleno podrá elegir entre los Concejales a su Presidente y Vicepresidente. Dicha designación se producirá al inicio del mandato, en cuyo caso corresponderá al Presidente elegido el ejercicio de las funciones recogidas en el presente artículo. En la elección del Presidente, cada Concejal escribirá un solo nombre en la papeleta correspondiente. Resultará elegido el que obtenga el voto de la mayoría absoluta de los miembros del Pleno. Si ninguno la obtuviera en primera votación, se repetirá la elección entre los dos Concejales que hubieran alcanzado mayor número de votos en la votación precedente, resultando elegido el que obtenga más votos en la nueva votación. En caso de empate resultará elegido el candidato de la lista que hubiese obtenido mayor número de votos en las elecciones municipales.

Elegido el Presidente, se procederá a la elección del Vicepresidente por el mismo sistema.

Las vacantes que se produzcan serán cubiertas por elección del Pleno en la forma establecida en el párrafo primero de este apartado.

Dichos cargos se mantendrán hasta la finalización del mandato.

3. El Presidente del Pleno asegura la buena marcha de sus trabajos, interpreta sus normas de funcionamiento, convoca y preside las sesiones y dirige y mantiene el orden de los debates.

Artículo 11. *Atribuciones del Pleno.*

1. Corresponde al Pleno:

a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.

b) La votación de la moción de censura al Alcalde y de la cuestión de confianza planteada por éste, que será pública y se realizará mediante llamamiento nominal en todo caso y se regirá en todos sus aspectos por lo dispuesto en la legislación electoral general.

c) La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica. Tendrán en todo caso naturaleza orgánica:

La regulación del Pleno.

La regulación, en su caso, del órgano para la defensa de los derechos de los vecinos.

La regulación de los órganos y procedimientos de participación ciudadana.

La división de la ciudad en distritos y la determinación y regulación de sus órganos, sin perjuicio de las atribuciones de la Junta de gobierno para establecer la organización y estructura de la Administración municipal ejecutiva.

La regulación de la organización política y administrativa del Ayuntamiento.

La regulación del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid.

d) La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales.

e) Los acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término municipal y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.

f) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales.

g) La determinación de los recursos propios de carácter tributario.

h) La aprobación de los presupuestos y la autorización de gastos en las materias de su competencia. Asimismo, aprobará la cuenta general del ejercicio correspondiente.

i) El otorgamiento de avales y garantías por el Ayuntamiento, que se ajustara a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

j) La aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los instrumentos de planeamiento previstos en la legislación urbanística y la aprobación de los Avances de Planeamiento.

k) La transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras Administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente.

l) La determinación de las formas de gestión de los servicios, así como el acuerdo de creación de organismos autónomos, de entidades públicas empresariales y de sociedades mercantiles para la gestión de los servicios de competencia municipal, y la aprobación de sus correspondientes estatutos y de los expedientes de municipalización. Asimismo, le corresponderá la aprobación de los estatutos de las fundaciones.

m) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos y disposiciones de carácter general, y la declaración de lesividad de sus actos.

n) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas en las materias de su competencia.

ñ) Establecer el régimen retributivo de los miembros del Pleno, de su Secretario General, del Alcalde, de los miembros de la Junta de Gobierno y de los órganos directivos municipales.

o) El planteamiento de conflictos de competencia a otras Entidades locales y a otras Administraciones públicas.

p) La creación de escalas, subescalas y clases de funcionarios, así como la atribución a los mismos de la condición de agente de la autoridad en atención a las funciones que les correspondan ejercer.

q) Las restantes atribuciones que le asignen las leyes, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de esta Ley.

2. Se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno, para la adopción de los acuerdos referidos en los párrafos *c), e), f) y k)* y para los acuerdos que corresponda adoptar al Pleno en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística.

Los demás acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos.

3. No podrán delegarse las competencias del Pleno referidas en los párrafos *a), b), c), e), f), g), h), j), k), m), ñ) y p).*

Las delegaciones del Pleno sólo podrán realizarse en sus Comisiones.

Artículo 12. Atribuciones de las Comisiones.

Corresponderán a las Comisiones las siguientes funciones:

a) El estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno.

b) El dictamen de las normas municipales con carácter previo a su aprobación por el Pleno.

c) El seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de gobierno, sin perjuicio del superior control y fiscalización que, con carácter general, le corresponde al Pleno.

d) Aquellas que el Pleno les delegue, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 13. Secretaría General del Pleno.

1. El Pleno contará con un Secretario General al que corresponderán las siguientes funciones:

a) La redacción y custodia de las actas, así como la supervisión y autorización de las mismas, con el visto bueno del Presidente del Pleno.

b) La expedición, con el visto bueno del Presidente del Pleno, de las certificaciones de los actos y acuerdos que se adopten.

c) La asistencia al Presidente del Pleno para asegurar la convocatoria de las sesiones, el orden en los debates y la correcta celebración de las votaciones, así como la colaboración en el normal desarrollo de los trabajos del Pleno y de las Comisiones.

d) La comunicación y publicación de los acuerdos plenarios.
e) El asesoramiento legal al Pleno y a las Comisiones cuando lo solicite el Alcalde, el Presidente, en su caso, o la cuarta parte, al menos, de los Concejales.

f) Las funciones que la legislación electoral general asigna a los Secretarios de los Ayuntamientos, así como la llevanza y custodia del registro de intereses de los miembros del Pleno y de los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local.

g) La remisión a la Administración General del Estado y a la de la Comunidad de Madrid de copia, o en su caso, extracto de los acuerdos adoptados por el Pleno.

Dichas funciones quedan reservadas a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Su nombramiento corresponderá al Presidente del Pleno por los sistemas previstos en las disposiciones legales que resulten de aplicación.

2. La Secretaría de las Comisiones corresponde al Secretario General del Pleno, quien podrá delegarla en un funcionario.

SECCIÓN TERCERA

Órganos ejecutivos de gobierno

Artículo 14. *Alcalde.*

1. El Alcalde impulsa la política municipal, dirige la acción de los restantes órganos ejecutivos, ejerce la superior dirección de la Administración ejecutiva municipal y responde ante el Pleno por su gestión política.

2. El Alcalde ostenta la máxima representación de la ciudad, sin perjuicio de las facultades de representación que puedan otorgarse a los titulares de otros órganos.

3. Además, corresponde al Alcalde el ejercicio de las siguientes atribuciones:

a) Determinar el programa de acción política municipal, impartir directrices para su ejecución y supervisar la acción de los restantes órganos ejecutivos de gobierno y directivos.

b) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, salvo que se haya optado por la designación de

un Presidente del Pleno, en los términos previstos en el artículo 10.

- c) Decidir los empates con voto de calidad en todos los órganos municipales colegiados en los que participe.
- d) Nombrar y cesar a los miembros de la Junta de Gobierno, a los Tenientes de Alcalde y a los Presidentes de los Distritos.
- e) Dictar bando para recordar y precisar los términos del cumplimiento de normas en vigor, o para efectuar apelaciones a la población municipal con motivo de acontecimientos o circunstancias especiales. Dictar decretos e instrucciones.
- f) Adoptar las medidas necesarias y adecuadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta inmediata al Pleno.
- g) Ejercer la superior dirección del personal al servicio de la Administración municipal y la superior jefatura de la policía municipal.
- h) Acordar al inicio del mandato el número, denominación y competencias de las áreas en las que se estructura la Administración municipal, en el marco de las normas orgánicas aprobadas por el Pleno.
- i) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.
- j) Asegurar la ejecución de las Leyes y las normas municipales, así como de los acuerdos y resoluciones de los órganos ejecutivos y administrativos, ordenando, en particular y cuando proceda, la publicación de estos últimos.
- k) La firma de convenios.
- l) La revisión de oficio y la declaración de lesividad de sus propios actos.
- m) La autorización y disposición de gastos en las materias de su competencia, así como el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de estos compromisos de gasto.
- n) La ordenación de pagos.
- ñ) El nombramiento del personal funcionario, laboral y eventual al servicio del Ayuntamiento de Madrid.

4. El Alcalde podrá delegar o desconcentrar mediante decreto las competencias anteriores en la Junta de Gobierno, en sus miembros, en los demás concejales y, en su caso, en los órganos directivos, con excepción de las señaladas en los párrafos *b), c), d), e)* en lo que se refiere a la adopción de bandos y *f).* Las atribuciones previstas en los párrafos *a) y h)* sólo serán delegables en la Junta de Gobierno.

Artículo 15. Los Tenientes de Alcalde.

El Alcalde podrá nombrar de entre los miembros de la Junta de Gobierno que ostenten la condición de Concejal, a los Tenientes de Alcalde, que le sustituirán por el orden de su nombramiento en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.

Artículo 16. Junta de Gobierno.

1. La Junta de Gobierno es el órgano ejecutivo de dirección política y administrativa.

2. Corresponde al Alcalde nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta de Gobierno, cuyo número no podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde.

El Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno a personas que no ostenten la condición de concejales, en los términos previstos en la legislación básica reguladora del gobierno y la administración local. Sus derechos económicos y prestaciones sociales serán los que establezca el Pleno.

Los miembros de la Junta de Gobierno podrán asistir a las sesiones del Pleno e intervenir en los debates, sin perjuicio de las facultades que corresponden a su Presidente.

3. La Junta de Gobierno responde políticamente ante el Pleno de su gestión de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión.

4. La Secretaría de la Junta de Gobierno corresponderá a uno de sus miembros, designado por el Alcalde, quien redactará las actas de las sesiones y certificará sobre sus acuerdos.

5. Las sesiones de la Junta de Gobierno son secretas; no obstante podrán celebrarse sesiones públicas por acuerdo de la

propia Junta, cuando la naturaleza de los asuntos a debatir así lo haga procedente.

A las sesiones de la Junta de Gobierno podrán asistir los concejales no pertenecientes a la Junta y los titulares de los órganos directivos, en ambos supuestos cuando sean convocados expresamente por el Alcalde.

Artículo 17. Atribuciones de la Junta de Gobierno.

1. Corresponde a la Junta de Gobierno:

- a) La aprobación de los proyectos de ordenanzas, de reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus Comisiones, y de los proyectos de los estatutos de los Organismos autónomos, Entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y Fundaciones.
- b) Adoptar planes, programas y directrices vinculantes para todos los órganos ejecutivos, organismos y empresas del Ayuntamiento de Madrid.
- c) La aprobación del proyecto de presupuesto.
- d) El sometimiento a información pública de los Avances de planeamiento, las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico no atribuidas expresamente al Pleno, así como de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.
- e) Las competencias de gestión en materia de contratos, concesiones y patrimonio, así como la designación de los miembros de las mesas de contratación y sus presidentes.
- f) La aprobación de las relaciones de bienes y derechos sujetos a expropiación y la de los proyectos expropiatorios, incluidos los urbanísticos tramitados por el procedimiento de tasación conjunta.
- g) El desarrollo de la gestión económica y, en particular, la aprobación de los gastos de carácter plurianual, la ampliación del número de anualidades y la modificación de los porcentajes de gastos plurianuales, así como la concertación de operaciones de crédito, todo ello de acuerdo con el presupuesto y sus bases de ejecución.

La autorización y disposición de gastos en las materias de su competencia y disponer gastos previamente autorizados por el Pleno, así como el reconocimiento y liquidación de las obligacio-

nes derivadas de estos compromisos de gasto y la convalidación de créditos.

Asimismo, corresponde a la Junta de gobierno la aprobación de todas las modificaciones presupuestarias, salvo las que se refieran a la concesión de un crédito extraordinario o suplemento de crédito que corresponderá en todo caso al Pleno.

h) Establecer la organización y estructura de la Administración municipal ejecutiva, en el marco de las normas orgánicas aprobadas por el Pleno y el nombramiento y el cese de los titulares de los órganos directivos.

i) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en las materias de su competencia.

j) Las facultades de revisión de oficio y la declaración de lesividad de sus propios actos.

k) El ejercicio de la potestad sancionadora y la concesión de licencias.

l) La creación, modificación o supresión de ficheros de datos de carácter personal.

m) Las modificaciones de la plantilla de personal de acuerdo con las normas que se establezcan en las bases de ejecución del presupuesto, aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, las bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del personal eventual, la separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo previsto en la legislación básica respecto a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario, la gestión del régimen de incompatibilidades y las demás competencias en materia de personal que no estén expresamente atribuidas en esta Ley a otros órganos.

n) Las demás atribuciones que le correspondan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, y aquellas que la legislación del Estado o de la Comunidad de Madrid asignen al municipio y no se atribuyan a otros órganos municipales.

2. La Junta de Gobierno podrá delegar o desconcentrar en alguno de sus miembros, en los demás concejales y, en su caso, en

los órganos directivos, las funciones enumeradas en el apartado anterior con excepción de las previstas en los párrafos a), b), c), d), h) e i).

Artículo 18. Estatuto de los titulares y miembros de los órganos ejecutivos de dirección política y administrativa.

1. Sin perjuicio de los requisitos específicos previstos para cada caso, para ser titular o miembro de un órgano ejecutivo de dirección política y administrativa se requiere en todo caso, ser mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme.

2. Los titulares o miembros de órganos ejecutivos de gobierno quedan sometidos al régimen de incompatibilidades establecido para los concejales en la legislación de régimen local y en la presente Ley.

CAPÍTULO II Administración Pública

Artículo 19. Principios generales.

1. La Administración del Ayuntamiento de Madrid se organiza y actúa, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, de acuerdo con los principios de jerarquía, eficacia, descentralización funcional, desconcentración, coordinación y servicio al ciudadano.

2. La Administración del Ayuntamiento de Madrid, bajo la superior dirección del Alcalde, sirve con objetividad a los intereses generales de la ciudad de Madrid, desarrollando las funciones ejecutivas y administrativas que le correspondan de acuerdo con lo previsto en esta Ley y las demás disposiciones que resulten de aplicación.

3. En sus relaciones con las demás Administraciones Públicas se ajustará a los principios de información, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. En sus relaciones con los ciudadanos actúa de conformidad con los principios de transparencia y participación.

Artículo 20. *Organización administrativa.*

La organización de la Administración del Ayuntamiento de Madrid corresponde al mismo en el marco de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 21. *Órganos directivos.*

1. La Junta de gobierno, en el marco de lo que se disponga en el correspondiente Reglamento orgánico, podrá crear órganos directivos en el ámbito de la Administración del Ayuntamiento de Madrid.

2. Los titulares de los órganos directivos serán nombrados atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley y de acuerdo con lo que se determine, en su caso, en el correspondiente Reglamento orgánico.

3. Corresponde a los órganos directivos desarrollar y ejecutar los planes de actuación y decisiones adoptadas por los órganos ejecutivos de dirección política y administrativa competentes. En particular, les corresponde el impulso de la ejecución de las decisiones adoptadas por los órganos políticos, la planificación y coordinación de actividades, evaluación y propuesta de innovación y mejora en relación con los servicios y actividades de su ámbito competencial, sin perjuicio de las funciones específicas que se les deleguen o se les atribuyan como propias.

4. Los titulares de los órganos directivos quedan sometidos al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones públicas, y en otras normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación.

Artículo 22. *Los Distritos.*

1. El Pleno deberá crear Distritos, como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión descentralizada, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión de la ciudad.

2. La Presidencia del Distrito corresponderá en todo caso a un Concejal.

Artículo 23. *Intervención General.*

1. La Intervención General es el órgano directivo al que corresponde el control interno de la gestión económica y financiera del sector público municipal y la función contable. Dicha función se ejercerá con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión controle.

La Intervención General del Ayuntamiento de Madrid ejercerá sus funciones en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2. El titular de la Intervención General deberá ser un funcionario de la Administración local con habilitación de carácter nacional. Su nombramiento corresponderá a la Junta de Gobierno y la provisión del puesto se efectuará por los sistemas previstos en el artículo 99 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en las disposiciones reglamentarias de desarrollo, y requerirá, en todo caso, una previa convocatoria pública.

Artículo 24. *Tesorería.*

1. La Tesorería es el órgano directivo al que corresponde la gestión de los recursos y disponibilidades financieras del Ayuntamiento de Madrid en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2. El titular de la Tesorería deberá ser un funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional. Su nombramiento corresponderá a la Junta de Gobierno y la provisión del puesto se efectuará por los sistemas previstos en el artículo 99 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en las disposiciones reglamentarias de desarrollo, y requerirá, en todo caso, una previa convocatoria pública.

Artículo 25. *Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid.*

1. Corresponden al Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid las siguientes funciones:

a) El conocimiento y resolución de las reclamaciones que se interpongan en relación con la aplicación de los tributos y la imposición de sanciones tributarias que realicen el Ayuntamiento de Madrid y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes del mismo, siempre que se trate de materias de su competencia o tratándose de competencias delegadas, cuando así lo prevea la norma o el acuerdo de delegación.

b) El conocimiento y resolución de las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto, relativo a los actos recaudatorios referidos a ingresos de derecho público no tributarios del Ayuntamiento de Madrid y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes del mismo.

c) En el caso de ser requerido por los órganos municipales competentes en materia tributaria, la elaboración de estudios y propuestas en esta materia y el dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales.

2. La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa y contra ella sólo cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo.

3. No obstante, los interesados podrán, con carácter potestativo, presentar previamente contra los actos previstos en el apartado 1.a) y b) el recurso de reposición regulado en el artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Contra la resolución, en su caso, del citado recurso de reposición, podrá interponerse reclamación económico-administrativa ante el órgano previsto en el presente artículo.

4. Estará constituido por un número impar de miembros, con un mínimo de tres, designados por el Pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que legalmente lo integren, de entre personas de reconocida competencia técnica, y cesarán por alguna de las siguientes causas:

- a) A petición propia.
- b) Cuando lo acuerde el Pleno con la misma mayoría que para su nombramiento.
- c) Cuando sean condenados mediante sentencia firme por delito doloso.

d) Cuando sean sancionados mediante resolución firme por la comisión de una falta disciplinaria muy grave o grave.

Solamente el Pleno podrá acordar la incoación y la resolución del correspondiente expediente disciplinario, que se regirá, en todos sus aspectos, por la normativa aplicable en materia de régimen disciplinario a los funcionarios del Ayuntamiento.

5. Su funcionamiento se basará en criterios de independencia técnica, celeridad y gratuidad. Su composición, competencias, organización y funcionamiento, así como el procedimiento de las reclamaciones se regulará por reglamento aprobado por el Pleno, de acuerdo en todo caso con lo establecido en la Ley General Tributaria y en la normativa estatal reguladora de las reclamaciones económico-administrativas, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias en consideración al ámbito de actuación y funcionamiento del Tribunal.

6. La reclamación regulada en el presente artículo se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la reclamación económico-administrativa ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

Artículo 26. Ente autónomo de gestión tributaria.

1. Para la consecución de una gestión integral del sistema tributario municipal, regido por los principios de eficiencia, suficiencia, agilidad y unidad en la gestión, el Pleno podrá crear un ente autónomo de gestión tributaria, responsable de ejercer como propias las competencias municipales de gestión en materia tributaria.

2. El Pleno determinará las competencias, organización y funcionamiento de dicho ente, al que corresponderá ejercer la función de recaudación, respetando, en su caso, lo dispuesto en la legislación básica en materia de gobierno y administración local.

3. La función de recaudación se ejercerá por el titular del ente de gestión tributaria, así como por los funcionarios adscritos al mismo de acuerdo con las disposiciones que, en su caso, se adopten.

Artículo 27. Órgano para la defensa de los derechos de los vecinos.

1. El Pleno podrá crear un órgano especializado para la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración muni-

cipal, cuyo funcionamiento se regulará en normas de carácter orgánico.

2. Dicho órgano podrá supervisar la actividad de la Administración municipal, y deberá dar cuenta al Pleno, mediante un informe anual, de las quejas presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración municipal. No obstante, también podrá realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo aconsejen.

3. Para el desarrollo de sus funciones, todos los órganos de Gobierno y de la Administración municipal están obligados a colaborar con el referido órgano.

Artículo 28. Asesoría Jurídica.

1. La asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno y a los órganos directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del Ayuntamiento y de los Organismos autónomos y Entidades públicas empresariales municipales, corresponderá a los Letrados del Ayuntamiento de Madrid integrados en la Asesoría Jurídica.

2. La Asesoría Jurídica es un órgano directivo cuyo titular será nombrado y separado por la Junta de Gobierno, entre funcionarios del Estado, de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales a los que se exija para su ingreso el título de licenciado en Derecho, o bien funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional.

3. Conforme a lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 551 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el Ayuntamiento y los Organismos autónomos y Entidades públicas empresariales locales podrán designar para su representación y defensa en juicio a abogado colegiado o confiar a éste sólo la defensa y la representación a un procurador.

4. Corresponde igualmente a los Letrados del Ayuntamiento de Madrid la representación y defensa en juicio del Pleno, en los términos que se determinen por éste.

5. Los Letrados del Ayuntamiento de Madrid podrán asumir el asesoramiento jurídico, así como la representación y defensa en

juicio de las sociedades mercantiles locales y de las fundaciones de participación municipal, mediante la suscripción del oportuno convenio en el que se determinará la compensación económica a abonar a la Hacienda municipal.

6. Los Abogados del Estado podrán representar, defender y asesorar al Ayuntamiento de Madrid mediante la suscripción del oportuno convenio de colaboración, en los términos contenidos en su legislación específica, a propuesta o previa audiencia del titular de la Asesoría Jurídica.

Artículo 29. Representación y defensa en juicio de autoridades y empleados públicos.

En los términos que se establezcan por el Pleno, los Letrados del Ayuntamiento de Madrid podrán asumir la representación y defensa en juicio de las autoridades, funcionarios y empleados del Ayuntamiento o de sus Organismos autónomos y Entidades públicas empresariales, cualquiera que sea su posición procesal, cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el cargo y no exista conflicto de intereses.

Artículo 30. Especialidades procesales.

1. En el ejercicio de las funciones de asistencia jurídica a las que se refieren los artículos anteriores, los Letrados del Ayuntamiento de Madrid ante los juzgados y tribunales de justicia de todo orden tendrán los derechos, deberes y prerrogativas establecidos para el asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio de la Administración General del Estado.

2. En concreto, las reglas contenidas en los artículos 11, 12, 13.1, 14 y 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y su normativa de desarrollo, serán de aplicación al Ayuntamiento de Madrid y entidades públicas dependientes.

TÍTULO III Competencias municipales

CAPÍTULO I Disposiciones generales

Artículo 31. Régimen general de competencias.

El Ayuntamiento de Madrid puede promover toda clase de actividades y prestar todos los servicios públicos que afecten al interés general de los ciudadanos y no estén expresamente atribuidos a otras administraciones públicas. En estos supuestos, el Ayuntamiento puede llevar a cabo actividades complementarias a las realizadas por esas Administraciones.

Artículo 32. Competencias municipales.

1. Las competencias del Ayuntamiento de Madrid son propias o atribuidas por la Administración General del Estado en régimen de delegación o de encomienda de gestión.

2. Asimismo, son competencias del Ayuntamiento de Madrid las que le transfiera o delegue la Comunidad de Madrid en aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 3/2003, de 11 de marzo, para el desarrollo del Pacto Local, en relación con los artículos 138 y siguientes de la Ley 2/2003, 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

Artículo 33. Competencias propias.

Son competencias propias todas las asignadas en calidad de tales a los municipios en general y a los de gran población, sea directamente por la legislación de régimen local, sea por la legislación estatal o autonómica reguladora de los distintos sectores de la acción administrativa.

Cuando estas competencias tengan una regulación específica en esta Ley se entenderán asignadas en los términos establecidos en la misma.

Artículo 34. Competencias delegadas y encomienda de gestión.

1. La atribución de competencias en régimen de delegación se efectuará de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.

2. La encomienda de gestión de determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicios, derivadas de competencias administrativas de la Administración General del Estado y de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica que resulte de aplicación, requiere la aceptación por el Pleno y se formaliza mediante convenio suscrito al efecto.

CAPÍTULO II

Seguridad pública

Artículo 35. Competencias en materia de seguridad pública.

En materia de seguridad pública al Ayuntamiento de la ciudad de Madrid le corresponden las siguientes competencias:

1. La protección y custodia de autoridades, edificios, instalaciones, dependencias, infraestructuras y equipamientos municipales, así como la colaboración con las Administraciones competentes en materia de seguridad.

2. En colaboración con las Administraciones competentes, la prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana y tratar de garantizarla en lo referente a aquellos actos que ocasionen molestia social o daños sobre bienes y personas en la vía pública.

3. El ejercicio de las competencias que en materia de policía administrativa y policía de seguridad le atribuye la normativa estatal, así como la denuncia en las materias de policía administrativa especial de competencia estatal.

4. La policía municipal ejercerá las competencias que en materia de policía judicial le atribuye la normativa estatal.

Artículo 36. Participación del Estado en la Junta Local de Seguridad de Madrid.

1. La Junta Local de Seguridad de Madrid ejerce las funciones que le atribuye su normativa reguladora.

2. En las sesiones de la Junta Local de Seguridad de Madrid podrán participar como vocales, de acuerdo con la Administración del Estado, los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tengan responsabilidades funcionales en el

municipio, así como, en su caso, un Juez o Magistrado designado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y un Fiscal designado por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia.

CAPÍTULO III

Participación en las infraestructuras de la Administración General del Estado

Artículo 37. Participación del Ayuntamiento en la gestión de infraestructuras, servicios y equipamientos.

1. El Ayuntamiento de Madrid participará, conforme a lo que se establezca en la legislación sectorial correspondiente, en la gestión de las infraestructuras, servicios y equipamientos cuya titularidad corresponda a la Administración General del Estado que afecten directamente a la ciudad de Madrid.

2. La participación del Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid en la gestión de infraestructuras de titularidad de la Administración General del Estado, no impedirá que el Ayuntamiento ejerza sus competencias propias en materia de planeamiento, gestión y disciplina urbanísticas, seguridad y policía local, protección civil y prevención y extinción de incendios, protección de la salubridad pública, movilidad y ordenación del tráfico de vehículos, medio ambiente y cualquier otra que asimismo corresponda al Ayuntamiento.

3. La participación del Ayuntamiento de Madrid en la gestión de las infraestructuras, servicios y equipamientos del Estado se hará sin menoscabo de la participación en la misma de la Comunidad de Madrid.

CAPÍTULO IV

Seguridad vial

Artículo 38. Ámbito material de aplicación de las competencias del Ayuntamiento de Madrid en materia de movilidad.

En los términos de la presente Ley y de la legislación sobre tráfico, circulación y seguridad vial, el Ayuntamiento de Madrid ejerce las competencias que tiene atribuidas en materia de tráfico,

circulación y seguridad vial sobre las vías urbanas y sobre las travesías, cuando éstas hayan sido declaradas vías urbanas, así como sobre cualquier espacio abierto a la libre circulación de personas, animales y vehículos, sin perjuicio de las competencias que por razones de seguridad ciudadana correspondan a otras Administraciones en los mismos ámbitos territoriales.

Artículo 39. Ordenación local del tráfico.

1. El Ayuntamiento de Madrid regulará los distintos usos de las vías y los espacios públicos urbanos de tránsito y circulación de personas, animales y vehículos, así como dicho tránsito y circulación, con la finalidad de armonizar los distintos usos, incluidos el peatonal, el de circulación, el de estacionamiento, el deportivo y el lúdico, y hacerlos compatibles de forma equilibrada con la garantía de la seguridad vial, la movilidad y fluidez del tráfico, la protección del medio ambiente y la protección de la integridad de los espacios públicos y privados.

2. Las ordenanzas que regulen el tránsito podrán tipificar infracciones y determinar sanciones para hacer efectivos sus mandatos, de acuerdo con los criterios establecidos por las Leyes.

3. En especial, las Ordenanzas municipales de acuerdo con lo que se establezca por la legislación estatal y autonómica aplicable:

a) Establecen los límites por encima de los cuales se prohíbe la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros contaminantes en o sobre las vías y los espacios públicos urbanos.

b) Determinan los procedimientos y los instrumentos necesarios para controlar y sancionar, en su caso, a los titulares o usuarios de vehículos de motor o ciclomotores que hagan uso indebidamente de las señales acústicas, emitan humos o produzcan ruidos molestos con sus vehículos.

En los casos en que las molestias sean graves o reiteradas, sin perjuicio de la imposición, en su caso, de la sanción que corresponda, podrá establecerse mediante ordenanza municipal la inmovilización cautelar del vehículo o ciclomotor, y la intervención del permiso o licencia de circulación del mismo, concediéndose al titular del vehículo un plazo de cinco días para

que proceda a subsanar las deficiencias que motiven las perturbaciones citadas en el párrafo anterior.

Artículo 40. *Competencias en materia de seguridad vial.*

Corresponde al Ayuntamiento de Madrid la policía administrativa preventiva de la seguridad vial en toda clase de vías urbanas, incluyendo la ordenación, señalización y dirección del tráfico y el uso de las vías, la vigilancia y protección del mobiliario urbano público y las señales de ordenación de la circulación y la instrucción de atestados en caso de accidentes de circulación.

Esta competencia comprende en todo caso:

a) La regulación y el control de cualesquiera de los usos de que sean susceptibles las vías y los espacios abiertos al tránsito de personas, animales y toda clase de vehículos y del tráfico y la circulación por ellos, garantizando, en todo caso, los derechos fundamentales de las personas.

La regulación comprende la señalización correspondiente; la limitación y, en su caso, restricción o prohibición de la circulación y el estacionamiento, cuando proceda de acuerdo con el ordenamiento jurídico; la imposición de la exhibición en lugar visible de distintivo o, en su caso, la instalación de un mecanismo sustitutivo para la acreditación del cumplimiento de la obligación legal de aseguramiento, de la autorización de acceso a zonas restringidas y el pago del impuesto de vehículos de tracción mecánica; y el establecimiento de medidas de discriminación positiva por razón de discapacidad.

El control comprende la intervención previa mediante sujeción a autorización; la adopción de las medidas cautelares que proporcionalmente requiera la seguridad pública, incluidas las de inmovilización y retirada de vehículos y de toda clase de objetos que representen peligro; y la realización de las pruebas pertinentes para la determinación de la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas en las personas que pongan en peligro la seguridad vial.

b) La aprobación de planes de seguridad vial y de movilidad, y, en su caso, la participación en aquellos planes que hayan de aprobar la Comunidad de Madrid o la Administración General

del Estado, de acuerdo con lo previsto en la legislación sectorial correspondiente.

c) El control de las detenciones, las paradas y los estacionamientos en las vías y los espacios públicos, así como de la utilización, en general, del dominio público y de los espacios libres municipales. Dicha función comprende la adopción de la medida de inmovilización o retirada de vehículos.

d) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente por el casco urbano, exceptuadas las travesías, salvo que éstas tengan la consideración de vías urbanas. Asimismo, le corresponderá la vigilancia y protección de las que autorice.

El informe, que será preceptivo, para la autorización de pruebas deportivas cuando discurran en parte de su recorrido por el término municipal de Madrid.

e) La adopción de las medidas necesarias para la concesión de la tarjeta de aparcamiento para personas discapacitadas con problemas graves de movilidad o para terceros que tengan reconocida tal condición y para la efectividad de los derechos que de la misma derivan, teniendo en cuenta la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 4 de junio de 1998 sobre creación de una tarjeta de estacionamiento para las personas con discapacidad.

f) La sanción de las infracciones de la normativa correspondiente en materia de seguridad vial, cuando la misma le atribuya la referida competencia.

Artículo 41. Medidas cautelares.

Cuando así lo demande la seguridad vial y la efectividad de la ordenación del uso de las vías y los espacios públicos, el Ayuntamiento de Madrid, en los términos regulados por Ordenanza municipal, puede adoptar, observando el principio de proporcionalidad, las siguientes medidas:

1.^a La inmovilización de toda clase de vehículos, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de las normas de estacionamiento, incluidas las que limiten éste en el tiempo, hasta la identificación del conductor.

b) Superación de los niveles máximos permitidos de emisión de gases, humos y ruidos permitidos por las ordenanzas municipales según el tipo de vehículo, hasta tanto no sean subsanadas las causas del incumplimiento de dichos niveles.

c) Incumplimiento de la obligación de solicitud de registro de transferencia de la titularidad del vehículo dentro del plazo establecido a este fin por las normas de aplicación.

d) Circulación sin cobertura del preceptivo seguro, sin perjuicio de las competencias sancionadoras de la Administración competente en materia de responsabilidad civil y seguros en la circulación de vehículos a motor.

2.^a La retirada de toda clase de vehículos y su posterior depósito en las dependencias habilitadas al efecto, en los siguientes supuestos:

a) Cuando obstaculicen o dificulten la circulación.

b) Cuando pongan en peligro la circulación o supongan un riesgo para las personas o los bienes.

c) Estacionamiento indebido en las zonas de estacionamiento restringido.

La comprobación de la concurrencia del supuesto legitimante de la retirada y la orden de que se lleve a cabo ésta pueden efectuarse de forma remota, a través de fotografías, filmación digital y otros medios tecnológicos. Por ordenanza municipal, y de acuerdo con la legislación vigente en la materia, se regularán las garantías que deben reunir los aparatos a través de los cuales se realice la captación y transmisión de estas imágenes y su incorporación al expediente administrativo.

d) La actividad de ofrecimiento en venta del propio vehículo o la realización de cualquier negocio jurídico no autorizado en vehículos estacionados en la vía pública.

Los gastos derivados de la inmovilización o retirada del vehículo son por cuenta del titular, siendo su abono o la garantía de su pago requisito previo para el alzamiento de la medida.

3.^a La realización de las pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado de intoxicación alcohólica, por estupefacientes, psicotrópicos o estimulantes, de acuerdo con la legislación aplicable.

4.^a La limitación de la circulación de determinados vehículos, la suspensión de la misma y el cierre de vías urbanas cuando sea necesario para preservar la seguridad, el medio ambiente o la protección del patrimonio, de acuerdo con la legislación aplicable.

5.^a Los agentes de la autoridad podrán denunciar al titular del vehículo en el caso de que sea residente en Madrid si incumpliera la obligación de acreditar, junto a la documentación preceptiva del vehículo, el documento que justifique el pago o la exención, en su caso, del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Artículo 42. Gestión del cobro de las sanciones en materia de circulación.

Los órganos municipales competentes para imponer las sanciones de circulación pueden solicitar de otras Administraciones del mismo o de distinto nivel, de acuerdo con el principio de colaboración interadministrativa y los oportunos convenios, la ejecución de las órdenes de embargo que hayan dictado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 43. Distintivos de los vehículos.

1. A fin de acreditar el cumplimiento de la obligación de aseguramiento del vehículo, el Ayuntamiento podrá crear y regular, mediante la correspondiente Ordenanza, un distintivo adhesivo, para los que estén domiciliados en la Ciudad de Madrid, para su exhibición en el vehículo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41.1.^ad).

2. Para los vehículos cuyo titular esté obligado al pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en la Ciudad de Madrid, mediante Ordenanza municipal se podrá imponer la obligación de exhibir en lugar visible del vehículo un adhesivo justificativo del pago o exención del Impuesto. En cualquier caso, el titular del vehículo o su conductor, cuando fuera requerido para ello por los agentes de la autoridad, deberán acreditar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en la materia exhibiendo el preceptivo justificante.

3. Los distintivos a que se refieren los apartados anteriores serán regulados por las correspondientes ordenanzas, si fueran implantados, en sus características y uso, su posible sustitución por otros medios, incluso digitales, que permitan a los agentes de la autoridad controlar, con inmediatez, el cumplimiento de aquellas obligaciones.

Artículo 44. Personal auxiliar de la policía municipal.

1. El Ayuntamiento podrá nombrar personal auxiliar para controlar la adecuada utilización de las paradas de estacionamiento en la vía pública y denunciar las conductas contrarias a las normas que regulen su utilización.

2. Las denuncias realizadas por personal auxiliar, sin perjuicio de las formalidades y requisitos de procedimientos exigidos por la norma, serán utilizadas como elemento probatorio para acreditar los hechos objeto de las denuncias. Al expediente administrativo que pueda instruirse, se incorporará una imagen del vehículo, ya sea en fotografía, filmación digital u otros medios tecnológicos, que permitan avalar la denuncia formulada.

Artículo 45. Ordenación del tráfico.

1. Para el ejercicio de las funciones de ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación, por acuerdo del Pleno podrá crearse un cuerpo de funcionarios, de conformidad con la autorización contenida en el apartado 3 del artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, añadido por la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

2. Dichos funcionarios no se integrarán en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en el ejercicio de sus funciones, tendrán la consideración de agentes de la autoridad subordinados a los miembros de la Policía Local del Ayuntamiento de Madrid.

Artículo 46. Embargo de los vehículos.

La tramitación de los procedimientos de recaudación ejecutiva se realizarán de conformidad con las normas generales de aplicación. Se exceptúa de estas reglas, el orden a observar en el embar-

go de bienes del deudor, supuesto en el que inmediatamente después del dinero en efectivo o en cuentas abiertas en las entidades de depósito, se podrá proceder al embargo del vehículo del cual sea titular el responsable de la infracción objeto de la sanción, sin perjuicio de seguir después el orden establecido en las normas de recaudación correspondientes.

CAPÍTULO V

Bienes inmuebles

Artículo 47. Desafectación de inmuebles del Estado.

Cuando se produzca la desafectación de inmuebles radicados en la Ciudad de Madrid, propiedad de la Administración General del Estado, destinados a la prestación de cualquier tipo de servicio público, incluidas las redes de instalaciones y cualquier otra infraestructura, podrá procederse mediante convenio a su enajenación preferente al Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid o, a sus entidades de derecho público que tengan atribuidas competencias en materia de vivienda y, en su caso, a la Comunidad de Madrid, siempre que vayan a destinarse a usos dotacionales públicos, a la construcción de viviendas de protección oficial de titularidad pública o al uso como vivienda de titularidad pública para alquiler. En el convenio se establecerán las contraprestaciones que se deriven de la enajenación, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 145 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

TÍTULO IV

Régimen jurídico y procedimiento

Artículo 48. Procedimiento de aprobación de las normas de competencia del Pleno.

1. La elaboración y aprobación de las ordenanzas y reglamentos y de los estatutos de los Organismos autónomos y Entidades públicas empresariales, con excepción del Planeamiento urbanístico que se regirá por su normativa específica, se ajustará al procedimiento establecido en el presente artículo.

2. La iniciativa para la aprobación de las normas de competencia del Pleno corresponde a:

a) La Junta de Gobierno, mediante remisión del correspondiente proyecto.

b) Los Grupos políticos y los Concejales.

c) Un número de ciudadanos igual o superior al 10 por 100 de los vecinos de la ciudad, de conformidad con lo establecido en la normativa básica aplicable.

Se excluye de la iniciativa ciudadana en todo caso la materia tributaria local.

3. En el caso de los proyectos, se aplicará el procedimiento siguiente:

a) La Junta de Gobierno aprobará el proyecto inicial, y lo someterá al trámite de alegaciones si afecta a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, durante un plazo no inferior a treinta días naturales.

b) Examinadas las alegaciones, el proyecto definitivo será aprobado por la Junta de Gobierno y remitido al Pleno, para su tramitación conforme a lo dispuesto por su Reglamento Orgánico. En la remisión, el proyecto irá acompañado de todas las alegaciones recibidas y de la memoria que recoja su valoración.

c) La Comisión competente dictaminará el proyecto.

d) El Pleno, en acto único, aprobará la norma.

e) La norma aprobada por el Pleno se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y entrará en vigor al día siguiente de su publicación, salvo que la propia norma disponga otra cosa, todo ello sin perjuicio de su publicación en el Boletín de la Ciudad de Madrid.

f) Sin perjuicio de lo anterior, la aprobación de la norma se comunicará a la Administración General del Estado y a la Administración de la Comunidad de Madrid.

4. En el caso de las proposiciones de los Grupos políticos y de los Concejales, se observará el procedimiento establecido en el apartado anterior, con las siguientes especialidades:

a) La proposición, acompañada de una memoria suscrita por su autor, se remitirá a la Comisión correspondiente, para su dictamen.

b) Una vez dictaminada por la Comisión, si la proposición afecta a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos se someterá al trámite de alegaciones durante un plazo no inferior a treinta días naturales.

c) La Comisión competente propondrá al Pleno la resolución de las alegaciones presentadas y la aprobación en acto único de la norma resultante.

5. La presentación de enmiendas por parte de los Concejales, así como su tramitación en Comisión y Pleno, se ajustará a lo que disponga el Reglamento Orgánico del Pleno.

6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio económico en curso requerirá la conformidad de la Junta de Gobierno para su tramitación.

Artículo 49. Procedimiento de aprobación del Presupuesto.

1. La iniciativa para la aprobación del Presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid corresponde en exclusiva a la Junta de gobierno local.

2. El Presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid se tramitará conforme al procedimiento común establecido en el artículo anterior para los proyectos normativos, con las especialidades que se establecen en el presente artículo, que serán desarrolladas por el Reglamento Orgánico del Pleno.

3. El Proyecto de Presupuesto se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por quince días naturales, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar alegaciones.

A estos efectos, tendrán la consideración de interesados:

a) Los vecinos de Madrid.

b) Los que resulten directamente afectados, aunque no residan en el municipio de Madrid.

c) Los colegios profesionales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.

4. Los interesados podrán presentar alegaciones, en los siguientes supuestos:

a) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles al municipio, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

b) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados, o bien éstos respecto a las necesidades para las que estén previstos.

5. El Proyecto de Presupuesto se remitirá al Pleno antes del día 1 de noviembre.

6. Las enmiendas que supongan modificación de ingresos requerirán, para su tramitación, la conformidad de la Junta de gobierno.

7. Las enmiendas que afecten a los créditos para gastos deberán presentarse compensando los incrementos y minoraciones de créditos en el seno de la Sección Presupuestaria a la que se refieran.

Artículo 50. Práctica de notificaciones.

1. La práctica de las notificaciones de los actos, acuerdos y resoluciones adoptadas por los distintos órganos del Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid, podrá encomendarse a personal auxiliar municipal habilitado al efecto.

2. Las notificaciones practicadas por este personal auxiliar municipal tienen como efecto la constancia fehaciente de su recepción o rechazo por el destinatario.

3. En todo caso, el Ayuntamiento debe procurar y fomentar que los ciudadanos puedan recibir las notificaciones de los procedimientos que les afecten a través de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones.

Artículo 51. Boletín de la Ciudad de Madrid y tablón de edictos.

1. Sin perjuicio de la obligación contenida en las leyes y reglamentos respecto a la publicación de actos y disposiciones en los diarios oficiales correspondientes, el Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid podrá dotarse de un Boletín propio con formato electrónico o informático.

2. Asimismo, el tablón de edictos del Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid podrá realizarse a través de medios electrónicos o informáticos. En este supuesto, deberá garantizarse el libre

acceso de los ciudadanos al mismo, mediante la instalación de terminales con acceso al tablón de edictos en todas las Juntas de Distrito y dependencias municipales.

Artículo 52. *Medidas para el cumplimiento de la legalidad.*

1. El Alcalde y la Junta de Gobierno pueden imponer multas coercitivas de hasta 3.000 euros como medio de ejecución forzosa de sus actos, reiteradas por cuantos períodos de 15 días sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos:

- a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado.
- b) Actos en que procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente.
- c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.

2. La multa coercitiva es independiente de la o las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas.

Dentro de los supuestos previstos en el apartado primero del presente artículo, mediante Ordenanza municipal se establecerán los casos concretos en los que pueda imponerse la multa coercitiva, la graduación de su cuantía en función de la gravedad del incumplimiento realizado, sin que en ningún caso pueda superarse el límite máximo de 3.000 euros y sus actualizaciones anuales conforme a la evolución anual del IPC.

3. En la imposición de sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las ordenanzas por resolución motivada del órgano que resuelva el expediente sancionador, se podrá sustituir la sanción económica por trabajos en beneficios de la comunidad, la asistencia obligatoria a cursos de formación, a sesiones individualizadas o cualquier otra medida alternativa que tenga la finalidad de sensibilizar al infractor sobre cuáles son las normas de conducta en el espacio urbano o reparar el daño moral de las víctimas.

Artículo 53. *Fin de la vía administrativa.*

Además de los previstos en el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ponen fin a la vía administrativa los actos dictados por los órganos muni-

cipales cuando ejerzan competencias atribuidas por el Alcalde y la Junta de Gobierno mediante la técnica de la desconcentración prevista en esta Ley.

Artículo 54. Remisión de acuerdos.

El Ayuntamiento de Madrid remitirá a la Administración General del Estado y a la de la Comunidad de Madrid copia de los acuerdos que adopte el Pleno, en los plazos y formas que se determinen reglamentariamente. Los acuerdos que adopten los órganos del gobierno municipal y los órganos directivos serán remitidos a las referidas Administraciones previo requerimiento de las mismas.

Artículo 55. Funciones de fe pública.

Las funciones de fe pública de los actos y acuerdos de los órganos unipersonales y las demás funciones de fe pública, salvo aquellas que estén atribuidas al Secretario General del Pleno, al Secretario de la Junta de Gobierno y al Secretario del Consejo de administración de las entidades públicas empresariales, serán ejercidas por los titulares de los órganos directivos o personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid que se determinen por la Junta de Gobierno.

Disposición adicional primera. Constitución de la Comisión Interadministrativa de Capitalidad.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, se procederá a la constitución de la Comisión Interadministrativa de Capitalidad prevista en el artículo 5. El Estado, a través del Ministerio de Administraciones Públicas, convocará en dicho plazo a las demás Administraciones, con objeto de proceder a la aprobación del reglamento interno de la Comisión.

Disposición adicional segunda. Competencias municipales y legislación sectorial.

1. La legislación sectorial no podrá alterar la distribución interna de competencias realizada por esta Ley entre el Pleno, el Alcalde y la Junta de Gobierno.

2. Las competencias que, a la entrada en vigor de esta Ley, la legislación sectorial atribuye a los distintos órganos del Ayunta-

miento de Madrid, se ejercerán conforme a la distribución de competencias prevista en la misma.

Disposición adicional tercera. *Instalación subterránea de las redes de servicios públicos y de interés general.*

1. Todas las instalaciones propias de las redes de los servicios públicos de suministros y de interés general que discurran por el término municipal deben ser subterráneas y ajustar su ubicación y trazado al planeamiento urbanístico y, en su caso, a las Ordenanzas de utilización del dominio público municipal. Sólo en caso de concurrencia de urgencia o de impracticabilidad técnica o económica puede autorizarse por el Ayuntamiento su instalación en superficie o aérea, sin perjuicio de las competencias urbanísticas de la Comunidad de Madrid.

2. Las instalaciones ya existentes al tiempo de la entrada en vigor de esta Ley deben ser soterradas cuando así lo disponga el planeamiento urbanístico o las correspondientes Ordenanzas de utilización del dominio público municipal y en los plazos que uno y otras establezcan. La imposición del soterramiento sólo da lugar a indemnización únicamente por el importe del valor de las instalaciones existentes que no deban considerarse amortizadas al tiempo en que deba efectuarse dicho soterramiento.

Disposición adicional cuarta. *Regulaciones específicas.*

La gestión y enajenación de los bienes inmuebles, las instalaciones, las telecomunicaciones y los servicios técnicos del Ministerio de Defensa y sus Organismos públicos, radicados en la ciudad de Madrid, se regirá por su legislación específica.

Disposición adicional quinta. *Tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad.*

Las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad emitidas por las autoridades municipales con arreglo al modelo establecido en la Recomendación 98/376/CE del Consejo, de 4 de junio de 1998, sobre la creación de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, tendrán validez en todo el territorio estatal, con independencia del municipio de procedencia del titular.

Disposición adicional sexta. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

El Registro de la Propiedad no practicará la inscripción correspondiente de ningún documento que contenga acto o contrato determinante de las obligaciones tributarias por el impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en el Ayuntamiento de Madrid, sin que se acremente previamente, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente, haber presentado la autoliquidación o, en su caso, la correspondiente declaración o comunicación.

Disposición adicional séptima.

El Ayuntamiento de Madrid, mediante Reglamento Orgánico, podrá adaptar las denominaciones de los órganos necesarios contemplados en esta Ley a las que se establezcan en la normativa básica del régimen local.

Disposición transitoria primera. Adecuación a las previsiones contenidas en la presente Ley.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid dispondrá de un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley para aprobar la adaptación de su organización a lo previsto en la misma. En tanto se aprueban tales normas, continuarán en vigor las disposiciones que regulen estas materias en el momento de entrada en vigor de esta Ley.

Disposición transitoria segunda. Régimen de incompatibilidades.

A los concejales del Ayuntamiento de Madrid les será de aplicación la incompatibilidad establecida en el artículo 2.4 de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

Dicho régimen tendrá vigencia hasta la fecha de la entrada en vigor de la nueva Ley reguladora de las Bases del Gobierno y la Administración Local, a partir de la cual será de aplicación el régimen previsto en la misma.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

Quedan sin efecto los artículos del Texto articulado de la Ley especial para el Municipio de Madrid, aprobado por Decreto 1674/1963, de 11 de julio, no derogados expresamente por disposiciones anteriores a la presente Ley.

Disposición final primera. *Habilitación competencial.*

La presente Ley se dicta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Madrid y al amparo de los siguientes títulos competenciales:

149.1.4.^a de la Constitución: La disposición adicional cuarta.

149.1.6.^a de la Constitución: El artículo 30.

149.1.8.^a de la Constitución: La disposición adicional sexta.

149.1.18.^a de la Constitución: Los artículos 1 a 29; 31 a 34; 47 a 55; disposiciones adicionales primera, segunda y tercera.

149.1.20.^a, 21.^a y 24.^a de la Constitución: El artículo 37.

149.1.21.^a de la Constitución: Los artículos 38 a 46 y la disposición adicional quinta.

149.1.29.^a de la Constitución: Los artículos 35 y 36.

Disposición final segunda. *Entrada en vigor.*

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

PRESENTATION

I

The Act on Capital Status and Special Regime of Madrid published in these pages is the first which jointly tackles two different but simultaneously converging realities in the city of Madrid: on the one hand, the fact that it is the most highly populated urban nucleus in Spain, and on the other, that it houses the capital of the State.

This is not the first time, however, that the need has been debated for legislation of these characteristics, nor the first time that a particular act for Madrid has been promulgated. However on this occasion there has been a major qualitative leap, since on dealing with these two distinctive features of Madrid this has taken place jointly in a single legislative text.

In order to become aware of this added value it is appropriate to look at both the historic development of this aspect and the nearest experiences in our immediate European surroundings.

With respect to the latter, Paris has a special act which is also applied to Lyons and Marseilles. There are special circumstances in the case of Berlin since this city, together with Bremen and Hamburg, have a city state statute. Rome does not yet have an individual statute, although the constitutional reforms of 2002 expressly refer to it.

II

Madrid has been the capital of Spain since May 1561 when Philip II decided to move the court there. Much more recently this status was confirmed by the 1931 Constitution, Article 5 of which stated that «*the capital of the Republic is established in Madrid*», thus elevating the matter to a level of priority importance for the state.

It was the President of the Republic himself, Manuel Azaña, who later stated that without a dynamic capital there is no Spanish nation or State:

«If Madrid did not exist it would be necessary to invent –so to speak –the federal capital of the Spanish Republic since Madrid is the centre... which absorbs all sentiments of the nation as a whole, where ideas are born and are then projected to all corners of the Peninsula, swollen and enhanced and sharpened by every aspect by Madrid life.»

Subsequently, in 1932, a subsidy was granted to Madrid by law of 80 million pesetas, spread over ten years and devoted exclusively to carrying out public works and services. The preamble to the bill stated as follows:

«We have omitted as unnecessary reference to the large outlays to which the Municipal Authority of the capital of Spain is committed by reason of the necessary ceremonies on the occasion of visits to Spain of foreign Heads of State and the national and international congresses of all types which take place in Madrid, with the Municipal Corporation duly meeting them, in correspondence with the dignity of the nation, from the ordinary resources comprising its budget, and these matters give rise to a substantial reduction in resources which could be devoted to purely local services».»

This concern for the capital was also recorded in the 1935 Municipal Act, Section 4 of which permitted the classification of municipalities based on their population, resources, particular modes of essential services and living conditions, and further specified that *the municipality of the Capital of the Republic has its*

own category, and its regime and governance may be the subject of a special Act. This act was not promulgated until 1963, when it was passed under the authorisation of the 1955 Municipal Act.

Important steps were also taken during the 1936–1978 period to make Madrid a great city and extol its function as capital of the State. During this period the 1941 General Urban Plan was promulgated with the consequence of expanding the city by annexing bordering municipalities –a phenomenon which also occurred in Barcelona, Valencia and Bilbao– by which Madrid grew from being a city of 66 to a large city of 607 square kilometres. This Plan provided as follows:

«Its status as national capital has been the basis for enlarging Madrid and at the present time continues to constitute its primordial function. In urban planning it requires the preparation of suitable spaces for the buildings and activities of a capital city with the necessary status and special care for all values of a traditional nature which can contribute even more to the spiritual enrichment of the city. Capital status also implies a responsibility to constitute a model and example for the regulation and development of other Spanish cities.»

The 1955 Local Government Act authorised the promulgation of individual regimes for large cities and a break with the characteristic uniformity of our local government. It specifically referred to the possibility for the Government to promulgate a special basic and economic regime by law for Madrid and Barcelona, as well as for other cities whose inhabitants and the importance of their problems also made this advisable (Section 94.2, added by the Act of 7 November 1957).

Pursuant to this Act two specific legislative provisions were promulgated for Madrid: Decree 1674/1963, of 11 July, on the Text of the Special Madrid Act, and Act 121/1963, of 2 December, on the Madrid Metropolitan Area.

The preamble to the 1963 Special Madrid Act stated:

«The text is now promulgated of the special Act for Madrid, the outcome of a laborious gestation which illustrates the prudence of the regime when dealing with the delicate aspects raised by Madrid municipal

government as a result of not only being the most populous Municipality of the nation, but the capital of the State and seat of national Government.»

It could be said from examining the contents of this Act, however, that it provided for a particular regulation of Madrid principally based on the fact that it is a large city, as the Special Barcelona Act had previously done, promulgated in 1960, such that references to the capital status were reduced to a declaration of Madrid being the capital of the Kingdom (Section 1.1) and a recognition of certain prerogatives: honorary pre-eminence in relation to other municipalities, coat-of-arms, and the ability to challenge municipal decisions only by special appeal (Section 2). Neither did this Act establish a special financing regime to compensate for the expenses and charges borne by Madrid as capital of the State, despite the fact that the draft bill intended to provide Madrid with a special subsidy equivalent to 5% of the General State Budget.

III

These and other legislative measures which were passed after 1963 certainly gave Madrid new resources and legal tools to develop and strengthen this great city which is the capital representing Spain and all Spaniards. In this process, however, the legal rules were always concise and never really responded to the needs of being the visible head of the State.

Furthermore, the system of liberties which Spaniards equipped themselves with in 1978 still left pending the development of what at later stages in our history was the subject of legislative attention. The Constitution thus proclaimed in Article 5 «*the capital of the State is the City of Madrid*», whilst the Statute of Autonomy of the Madrid Region declared in Section 6 that Madrid, as a result of its status as capital of the State and seat of general institutions, will have a special regime promulgated by Act of Parliament.

Today, at a time of full democratic maturity, we have now promulgated this Act on Capital Status and Special Regime of

Madrid, which without doubt will provide us with another important repertory of powers to continue the process of development and improvement of the city. Powers which are nothing other than instruments with which to provide services to all Spaniards with greater efficiency and intensity which, as the capital of the nation, constitutes the true meaning of Madrid.

Alberto Ruiz-Gallardón
Mayor of Madrid

ACT ON CAPITAL STATUS AND SPECIAL REGIME OF MADRID

(Official State Gazette, July 5, 2006)

(Correction of mistakes, Official State Gazette, July 26, 2006)

SUMMARY

PREAMBLE	77
PRELIMINARY TITLE. GENERAL PROVISIONS.....	83
Section 1. <i>Subject matter of the Act</i>	83
Section 2. <i>Municipal autonomy</i>	83
TITLE I. CAPITAL STATUS REGIME.....	84
Section 3. <i>Relations between State, regional and local institutions in the city of Madrid.....</i>	84
Section 4. <i>Regime governing the capital status of the City of Madrid</i>	84
Section 5. <i>Capital Status Inter-Administrative Commission..</i>	85
Section 6. <i>Chairmanship of the Capital Status Inter-Administrative Commission</i>	85
TITLE II. MUNICIPAL GOVERNANCE AND ADMINISTRATION	86
CHAPTER I. MUNICIPAL GOVERNANCE.....	86
SECTION ONE. GENERAL PROVISIONS	86
Section 7. <i>Organisation.....</i>	86
Section 8. <i>Jurisdiction</i>	86
PART TWO. THE PLENARY (PLENO)	86
Section 9. <i>The Plenary</i>	86
Section 10. <i>Chairman of the Plenary</i>	87

Section 11.	<i>Functions of the Plenary</i>	88
Section 12.	<i>Functions of Committees</i>	90
Section 13.	<i>General Secretariat of the Plenary</i>	90
PART THREE. EXECUTIVE GOVERNING BODIES ..		91
Section 14.	<i>Mayor</i>	91
Section 15.	<i>Deputy Mayors</i>	92
Section 16.	<i>Governing Council</i>	92
Section 17.	<i>Functions of the Governing Council</i>	93
Section 18.	<i>Regulation of the heads and members of administrative and political management executive bodies...</i>	95
CHAPTER II. PUBLIC ADMINISTRATION.....		95
Section 19.	<i>General principles</i>	95
Section 20.	<i>Administrative organisation</i>	96
Section 21.	<i>Executive bodies</i>	96
Section 22.	<i>Districts</i>	97
Section 23.	<i>General auditing</i>	97
Section 24.	<i>Treasury</i>	97
Section 25.	<i>Madrid Municipal Administrative-Economic Tribunal</i>	98
Section 26.	<i>Autonomous tax management executive body</i>	99
Section 27.	<i>Body for the defence of rights of residents</i>	100
Section 28.	<i>Legal Service</i>	100
Section 29.	<i>Representation and defence in legal proceedings of public employees and authorities</i>	101
Section 30.	<i>Particular procedural aspects</i>	101
TITLE III. MUNICIPAL POWERS AND FUNCTIONS		102
CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS.....		102
Section 31.	<i>General regime of powers and functions</i>	102
Section 32.	<i>Municipal powers and functions</i>	102
Section 33.	<i>Own powers and functions</i>	102
CHAPTER II. PUBLIC SAFETY AND SECURITY		103
Section 35.	<i>Powers and functions in the field of public safety and security</i>	103
Section 36.	<i>Participation of the State on the Madrid Local Safety and Security Board</i>	103

CHAPTER III. PARTICIPATION IN INFRASTRUCTURES OF THE GENERAL STATE ADMINISTRATION	104
CHAPTER IV. ROAD SAFETY	104
Section 38. <i>Material scope of application of the powers and functions of the Madrid Municipal Authority in the field of mobility</i>	104
Section 39. <i>Local traffic regulation.....</i>	105
Section 40. <i>Powers and functions in the field of road safety</i>	106
Section 41. <i>Precautionary measures</i>	107
Section 42. <i>Managing the collection of traffic penalties</i>	108
Section 43. <i>Vehicle stickers or documents displayed.....</i>	109
Section 44. <i>Municipal police auxiliary personnel.....</i>	109
Section 45. <i>Traffic regulation.....</i>	109
Section 46. <i>Embargo of vehicles.....</i>	110
CHAPTER V. REAL ESTATE	110
Section 47. <i>Removal of encumbrances of real estate of the State</i>	110
TITLE IV. LEGAL REGIME AND PROCEDURE	111
Section 48. <i>Procedure for promulgation of legislation falling within the competence of the Plenary</i>	111
Section 49. <i>Procedure for approval of the Budget.....</i>	112
Section 50. <i>Notification</i>	113
Section 51. <i>Madrid City Gazette and edict board.....</i>	114
Section 52. <i>Measures for complying with legality</i>	114
Section 53. <i>Conclusion of administrative channels</i>	115
Section 54. <i>Forwarding resolutions</i>	115
Section 55. <i>Public certification functions</i>	115
Additional provision one. <i>Constitution of the Capital Status Inter-Administrative Commission.....</i>	115
Additional provision two. <i>Municipal powers and functions and sector legislation</i>	116
Additional provision three. <i>Underground installation of public service and general interest networks</i>	116
Additional provision four. <i>Specific regulation</i>	116
Additional provision five. <i>Parking permits for disabled persons.</i>	116
Additional provision six. <i>Tax on the Increase in Value of Urban Land.....</i>	117

Transitional provision one. <i>Adaptation to the provisions of this Act</i>	117
Transitional provision two. <i>Disqualification regime</i>	117
Final provision one. <i>Competence to promulgate</i>	118
Final provision two. <i>Entry into force</i>	118

PREAMBLE

I

In accordance with Article 5 of the Spanish Constitution Madrid is the capital of the State; and in demographic terms is the most highly populated city of Spain, the centre of an extensive metropolitan area: somewhat more than three million persons reside in the city without taking into account the hundreds of thousands of others who travel daily through it. These particular features, both institutional and social, are closely interrelated: the reality of Madrid as a large city cannot be disassociated from its status as capital of the State.

The particular features of Madrid call for special legal treatment in order to facilitate effective municipal government. This is the purpose of this Act. To this end it tackles an integrated treatment of the different factors which distinguish Madrid, those deriving from both its status as capital and as a large city. This Act thus develops the provisions laid down in this respect by both the Constitution and the Statute of Autonomy of the Madrid Region (*Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid*).

Section 6 of the Madrid Regional Statute in fact provides that as a result of its dual status as capital of the State and seat of general institutions, the city of Madrid shall have a special regime,

regulated by Act of Parliament, which shall determine relations between the State and regional and municipal institutions in exercise of their respective powers and functions. Furthermore, however, the Act includes other special rules aimed at facilitating effective government of a large city of the dimensions and problems of Madrid, without equal in the rest of Spain.

Special regulation of the city of Madrid is not in any event a legal novelty. In 1963 a special regime was promulgated for Madrid for the first time in an attempt, according to the preamble to Decree 1674/1963, of 11 July, to respond to the delicate aspects of Madrid municipal administration as a result of not only being the most populous municipality in the nation but also the capital of the State and seat of national Government.

Neither was the particular nature of Madrid overlooked in Act 7/1985 on regulation of the Foundations of Local Government. Additional provision six of this Act made provision for future replacement of the special regime promulgated in 1963 by another more up-to-date regime. This Act implements this legal provision.

It is clear that this Act does not contain the entire legal regime governing the city of Madrid. It contains solely special rules which will apply in priority to those laid down by general legislation. Furthermore the special rules under this Act do not question the exercise of the legislative powers of the Madrid Region (*Comunidad de Madrid*) in relation to local government.

This Act is structured into four titles, preceded by a preliminary title, which regulate the regime of capital status, political and administrative organisation of the Madrid Municipal Authority (*Ayuntamiento de Madrid*), the powers and functions of the State which are transferred, and the particular features of the legal regime applicable to the city.

II

Title I implements the regime deriving from the status of Madrid as capital of the State, creating the so-called «Capital Status Inter-Administrative Commission» (*Comisión Interadministrativa de Capitalidad*), as a collaborative body between the State, the Madrid Region and the City of Madrid in matters directly connec-

ted with the fact of its capital status, such as public safety or holding official acts.

The Act thus specifies matters falling within the competence of this Commission, although it leaves the possibility open for the three institutions which comprise it to extend the scope of their collaboration and consensus in the future in aspects relating to capital status. An open model of collaboration is thus established which will enable the functions of the Commission to adapt to new demands and facilitate suitable responses to the complex requirements of the city.

The value of this important collaborative instrument lies in defining a legal framework for cooperation between the three Administrations in order ensure the well-being and quality of life of the citizens of Madrid.

This legislation also sets out the constitutional provision that Madrid is the capital of the State, expressly acknowledging this historical reality and assigning to it the functions of this status.

III

Title II deals with essential aspects of organisation of the Madrid Municipal Authority as an essential part of the statute of the capital city of the State.

The model of political and administrative organisation of the Madrid Municipal Authority contained in this title develops the provisions of Title X of the Basic Act of Local Government, i.e. there is no election for a model different from the current model but based on the latter various aspects are profiled and particular features introduced.

This regulation is based on two principles. Firstly, the system of local government of a parliamentary nature is strengthened, which amongst other features takes the specific form of a more clear separation between the Plenary (*Pleno*) and the local executive, a strengthening of the functions of the executive, and an acknowledgement of the due separation between municipal governance and administration. Secondly, the scope of matters which may be the subject of legislative powers and municipal self-organisation is extended –fundamental elements of local autonomy– by deliberately avoiding the regulation of secondary

aspects of administrative organisation, being a matter which must be reserved to the free discretion of the Municipal Authority.

With respect to political organisation, consisting principally of the Plenary (*Pleno*), the Mayor and the Governing Council (*Junta de Gobierno*), various particular features are introduced which do not alter the nature or position of each of these bodies in municipal government, nor their principal functions, but are aimed at profiling these bodies along the lines of a parliamentary system.

The power should be emphasised which is given to the Mayor to propose to the Plenary the appointment, from among Town councillors, of its Chairman and Deputy Chairman. Furthermore, the powers and functions of the Plenary are regulated in order to strengthen those relating to debating major strategic decisions, political control and legislative powers, with transfer to the Governing Council of functions of an executive nature which, for reasons of efficacy and consistency with the system of parliamentary government, must be given to this body. The Plenary maintains all relevant powers and functions which it has traditionally exercised: approval of general budgets and substantial modifications to them, urban planning, municipal legislation, powers and functions relating to the delineation and alteration of the municipal district, participation in supra-municipal organisations, agreement to delegation of powers and functions from other public Administrations, and finally powers and functions of political control which extend to the whole area of municipal action, granting the Plenary power to specify modes of control by Town councillors (*Concejales*) and political groups, as well as access to administrative information which they require to carry out their representative function.

The re-regulation of powers and functions of the Plenary and the principles which underlie it also explain the changes in the powers and functions of the Mayor. In general, the principal powers and functions of the Mayor are promoting municipal policy, direction of other executive bodies and senior direction of the municipal executive administration and, of course, accounting for his or her actions to the Plenary.

The need for major cities to have a strong executive with management capacity requires that the Governing Council be confi-

gured as the senior collegiate body of executive functions and administrative management. The powers and functions of this nature attributed by current legislation to the Plenary and to the Mayor are thus transferred to the Governing Council.

Finally, title II establishes a clear distinction between the superior bodies of the Municipal Authority: the Mayor, Governing Council and Town councillors which are members of the Governing Council, who have the functions of political direction and who must account for their management to the Plenary, and the municipal Administration which is responsible for serving the public interest with objectivity –Article 103 of the Constitution– under the direction of the political bodies and necessary controls of the Plenary.

IV

Title III deals with general regulation of the different forms of allocating powers and functions to the city, distinguishing between its own and delegated powers and functions and those attributed by the technique of ‘commissioned management’ (*encomienda de gestión*). The powers and functions of the State are also determined which are assigned to the city by means of this Act.

In accordance with the provisions of the European Charter of Local Self-Government and basic State legislation, own powers and functions are exercised under a system of autonomy under own responsibility, always subject to due coordination in their programming and implementation with other public administrations.

The city of Madrid may exercise powers of the General State Government and of the Madrid Region by delegation, in accordance with the applicable legislation in each case.

The Act also refers to the possibility for the State or the Madrid Region to entrust legal, technical or material tasks to the city of Madrid, in accordance with applicable legislation in each case.

Furthermore, the city of Madrid is granted certain powers and functions of the State in the field of mobility, public safety and security and infrastructures, being important areas of its management and governance.

Thus, in the infrastructure field, the participation of the Madrid Municipal Authority is recognised in those infrastructures which are located within its municipal district for which the General State Administration is responsible.

A central role is played, in this process of extending municipal powers and functions in areas with an important effect on quality of life of the citizens, by the measures laid down in the field of road safety, aimed at increasing the powers of the Municipal Authority to deal with problems such as motor vehicle noise and pollution emissions, parking, driving under the effect of alcohol or drugs or psychotropic substances, the improvement of living conditions for persons with reduced mobility, etc. In order to make measures effective the Municipal Authority is allowed to take a series of precautionary measures which will increase its authority to enforce road safety rules.

V

Title IV deals with the regulation of particular features of the legal regime of the city of Madrid which are justified by the scale of administrative activities generated by the Madrid Municipal Authority.

Madrid is the city with the highest population in Spain and this means that the volume of administrative activities cannot be compared with that of any other municipality. Based on this objective fact, the purpose of these special features is to introduce speed and flexibility into management, strengthening the efficacy of administrative action.

In the field of administrative procedures the principal steps are defined in the procedure for the Plenary to promulgate municipal regulations in order to make this more flexible compared with the current regulation, which provides for two-fold approval by the Full Municipal Authority. In particular, this new procedure distinguishes between the processing of draft regulation by the municipal executive and processing within the Plenary. In the former there will be a process of public consultation when plans affect the legitimate rights or interests thereof, and ends with their approval by the Governing Council. The

processing of plans in the Plenary begins with sending them and the background to the competent Committee which must report on them and submit them to the Plenary for its approval in a single act.

Finally, the last portion of the Act has the purpose of ensuring start-up of the Capital Status Inter-Administrative Commission, regulating parking permits for disabled persons and establishing transitional rules in the field of disqualification from office.

PRELIMINARY TITLE

General provisions

Section 1. Subject matter of the Act.

1. This Act regulates the special regime of the City of Madrid and the particular features thereof as capital of the State and seat of general institutions, without prejudice to the powers and functions of the Madrid Region.

2. In matters not regulated by this Act, the following shall apply to the city of Madrid:

a) The provisions of basic State legislation in the field of local government and administration and of subsidiary regional legislation, as the case may be.

b) Other legislation of the State and of the Madrid Region, depending on the constitutional and statutory distribution of powers and functions.

Section 2. Municipal autonomy.

1. The City of Madrid shall have autonomy to manage its interests, with sufficient economic-financial resources, in accordance with the Constitution, the Statute of Autonomy of the Madrid Region, and other legislation. Autonomous municipal management shall be carried out with institutional loyalty and in collaboration, cooperation and coordination with the General State Administration and the Administration of the Madrid Region.

2. The Government and Administration of the City of Madrid comprise the functions of regulation and implementation of matters falling within municipal competence. These functions

shall be carried out by the Municipal Authority, under its own responsibility, and in the framework of legislation, by distinct bodies for those of regulation and those of implementation and management.

3. In order to give effectiveness to the autonomy laid down in sub-section 1, this Act grants powers and functions to the Municipal Authority of the City of Madrid in the fields of infrastructures, mobility, public safety and security and the legal and procedural system. Likewise, and in accordance with the provisions of Section 2 of Act 7/1985, of 2 April, regulating the Bases of Local Government, State sector legislation shall grant powers and functions, as appropriate, in the field of services and infrastructures which are basic to development of the City.

TITLE I

Capital status regime

Section 3. Relations between State, regional and local institutions in the city of Madrid.

1. In accordance with Article 5 of the Spanish Constitution, which provides that the capital of the State shall be the City of Madrid, and in compliance with the provisions of Section 6 of the Statute of Autonomy of the Madrid Region, promulgated by Organic Act 3/1983, of 25 February, this title regulates the articulation of relations between State, regional and local institutions in the territorial area of the city of Madrid in those aspects connected with its status as capital.

2. In matters not provided for in this title, inter-administrative relations in the area of the city of Madrid shall take place in accordance with the principles laid down by Act 30/1992, of 26 November, on the Legal Regime of Public Administrations and Common Administrative Procedure, basic legislation on local governance and administration, and other applicable State or regional legislation.

Section 4. Regime governing the capital status of the City of Madrid.

The regime governing the capital status of the City of Madrid to which this title relates shall cover the following matters:

- a) Public safety and security, provided that it is immediately connected with the protection of persons and property in international or national events which are held in Madrid in its capacity as capital of the State.
- b) Coordination in the organisation and holding of official acts of a State nature.
- c) The protection of persons and property as a result of exercise by the public of the right to gather and demonstrate when the scope of call thereto presents a State dimension.
- d) The system of protocol of the City of Madrid and its political representatives.
- e) Any other matter which may have a relevant effect on the three Administrations in the view thereof as a result of the capital status of Madrid.

Section 5. Capital Status Inter-Administrative Commission.

1. Respecting the scope of powers and functions of the different participating administrations, the Capital Status Inter-Administrative Commission is created as a collaborative body for better articulation of the regime governing capital status laid down by this Act.

2. The Capital Status Inter-Administrative Commission shall be made up of an equal number of members from the three Administrations.

Section 6. Chairmanship of the Capital Status Inter-Administrative Commission.

1. The Capital Status Inter-Administrative Commission shall be chaired by the State.

2. Its composition and functioning shall be determined by its Regulations which shall be unanimously approved by its members.

TITLE II
Municipal governance and administration**CHAPTER I**
Municipal governance**SECTION ONE**
General Provisions**Section 7. *Organisation.***

The following shall be the municipal bodies of governance:

- a) Representative political deliberation: the Plenary.
- b) Execution of political and administrative management: the Mayor, the Governing Council, the Deputy Mayors, Town Councillor with government responsibilities, unelected members of the Governing Council and those determined in the corresponding organic statute.

Section 8. *Jurisdiction.*

Criminal liability of the Mayor, Deputy Mayors and other Members of the Madrid Municipal Authority, and civil liability which they may incur in occupying their positions, shall be subject to the jurisdiction laid down by the Judiciary Act (*Ley Orgánica del Poder Judicial*).

PART TWO
The Plenary (Pleno)**Section 9. *The Plenary.***

1. The Plenary shall be the senior political representative body of citizens in the municipal government, shall exercise the functions expressly assigned thereto, and shall consist of the Mayor and Town councillors, without prejudice to attendance at its meetings and involvement in its deliberations by unelected members of the Governing Council.
2. Plenary sessions shall be public. Debate and voting may nevertheless be secret on those matters which may affect the fundamental rights of citizens referred to by Article 18.1 of the Constitution, when so resolved by an absolute majority.

The Plenary may operate through Committees, which shall be made up of Members designated by political groups in proportion to their representation on the Plenary.

3. In all matters not provided for in this Act in relation to the convening, constitution, functioning and passing of resolutions, the Plenary shall be governed, within the framework of the provisions of basic State legislation in the field of local government and administration, by its Basic Regulations and Decisions issued by its Chairman in interpretation thereof.

Section 10. *Chairman of the Plenary.*

1. The Mayor shall convene and preside over meetings of the Plenary. The Mayor may nevertheless promote the appointment by the Plenary of the Chairman and Deputy Chairman in accordance with the provisions of the following sub-section.

2. On the initiative of the Mayor, the Plenary may elect its Chairman and Deputy Chairman from amongst Town councillors. The said appointment shall take place on commencement of the mandate, in which case the elected Chairman shall exercise the functions set out in this section. In election of a Chairman each Town councillor shall write a single name on the corresponding paper. The person shall be elected who obtains votes of an absolute majority of members of the Plenary. If none obtains the same on first vote, the election shall be repeated between the two Members who have achieved the highest number of votes in the previous voting, and the person shall be elected who obtains more votes on the new voting. In the event of a tie, the candidate shall be elected from the list who has obtained the highest number of votes in the municipal elections.

After the Chairman is elected, the election shall take place of the Deputy Chairman by the same system.

Vacancies which arise shall be filled by election by the Plenary in the manner established in the first paragraph of this sub-section.

The said positions shall be held until the end of the mandate.

3. The Chairman of the Plenary shall ensure proper course of its work, interpret its operating rules, convene and chair meetings, and direct and maintain order in debates.

Section 11. *Functions of the Plenary.*

1. The Plenary shall have the following functions:

a) Monitoring and oversight of bodies of governance.

b) Voting on a motion to censure the Mayor and on a question of confidence raised by the latter, which shall be public and in any event by calling by name and be governed in all respects by the provisions of general electoral legislation.

c) Approval and modification of organic regulations. The following shall in any event be of a organic nature:

Regulation of the Plenary.

Regulation, as the case may be, of the body for protection of the rights of inhabitants.

Regulation of bodies and procedures for public participation.

Division of the city into districts and determination and regulation of its bodies, without prejudice to the functions of the Governing Council in establishing the organisation and structure of the municipal executive administration.

Regulation of political and administrative organisation of the Municipal Authority.

Regulation of the Madrid Municipal Economic-Administrative Tribunal.

d) Approval and modification of municipal ordinances and regulations.

e) Resolutions relating to the delineation and alteration of the municipal district and the adoption or modification of its flag, coat-of-arms or emblem.

f) Resolutions relating to participation in supra-municipal organisations.

g) Determination of own funds of a tax nature.

h) Approval of budgets and authorisation of expenses in fields falling within its competence. It shall furthermore approve the general accounts for the corresponding financial year.

i) The grant of guarantees and security by the Municipal Authority, which shall comply with the provisions of Legislative Decree 2/2004, of 5 March, promulgating the Revised Text of the Act on Regulation of Local Treasuries (*haciendas locales*).

j) Approval putting an end to municipal processing of planning instruments provided for by planning legislation and the approval of Advance Planning Documents.

k) The transfer of functions or activities to other public authorities and the acceptance of delegation or commissioned management made by other Authorities, unless mandatorily laid down by law.

l) Determination of forms of managing services and resolutions to create autonomous bodies, public business entities (*entidades públicas empresariales*) and mercantile companies for the management of services falling within municipal competence, and approval of their corresponding bylaws and municipal adaptation procedures. It shall further be responsible for the approval of the bylaws of foundations.

m) *Ex officio* power to review its own actions and provisions of a general nature and declaration of the prejudicial nature of its acts.

n) The exercise of judicial and administrative actions in matters falling within its competence.

ñ) Establishing rules governing the remuneration of members of the Plenary, its General Secretary, the Mayor and members of the Governing Council and municipal executive bodies.

o) Raising jurisdictional disputes with other local entities and other public authorities.

p) The creation of scales, sub-scales and classes of civil servants and the grant thereto of the status of agent of the authority based on the functions they are responsible for carrying out.

q) Other functions assigned to them by law without prejudice to the provisions of additional provision two of this Act.

2. Votes in favour by an absolute majority of the legal number of members of the Plenary shall be required to pass the resolutions referred to in paragraphs *c), e), f)* and *k)* and for resolutions to be passed by the Plenary in processing the general planning instruments provided for by planning legislation.

Other resolutions shall be passed by a simple majority of votes.

3. The powers and functions of the Plenary referred to in paragraphs *a), b), c), e), f), g), h), j), k), m), ñ)* and *p)* may not be delegated.

Delegations by the Plenary may only be made to its Committees.

Section 12. *Functions of Committees.*

Committees shall have the following functions:

- a) To study, report or consult on matters to be submitted for decision by the Plenary.
- b) Reporting on municipal regulations prior to the approval thereof by the Plenary.
- c) Monitoring management by the Mayor and the governing team thereof without prejudice to the superior control and oversight in general of the Plenary.
- d) Those which the Plenary delegates to them in accordance with the provisions of this Act.

Section 13. *General Secretariat of the Plenary.*

1. The Plenary shall have a General Secretary who shall have the following functions:

- a) Preparation and custody of minutes, and supervision and authorisation thereof with the approval of the Chairman of the Plenary.
- b) Issue, with the approval of the Chairman of the Plenary, of certificates of acts and resolutions passed.
- c) Assisting the Chairman of the Plenary in ensuring that meetings are convened, the order of debates and correct voting procedure, as well as collaboration in the normal implementation of work of the Plenary and Committees.
- d) Communication and publication of resolutions of the Plenary.
- e) Legal advice to the Plenary and to Committees when so requested by the Mayor, the Chairman, as the case may be, or at least one fourth of Town councillors.
- f) The functions attributed by general electoral legislation to the Secretaries of Municipal Authorities and maintenance and custody of the register of interests of members of the Plenary and of unelected members of the Local Governing Council.
- g) Forwarding copies, or extracts, as the case may be, of resolutions passed by the Plenary to the General State Administration or that of the Madrid Region.

The said functions shall be reserved to local administration civil servants with national qualification. They shall be appointed

by the Chairman of the Plenary by the systems laid down by applicable legal provisions.

2. The General Secretary of the Plenary shall be responsible for the Secretariat of Committees, and may delegate the same to a civil servant.

PART THREE

Executive governing bodies

Section 14. Mayor.

1. The Mayor shall promote municipal policy, direct the action of the remaining executive bodies, exercise senior direction of the municipal executive Administration and answer to the Plenary for his political management.

2. The Mayor shall be the senior representative of the city, without prejudice to the representative powers which may be granted to the heads of other bodies.

3. The Mayor shall also carry out the following functions:

a) Determine the programme of municipal political action, lay down directives for its implementation and supervise the action of other executive bodies of governance and management.

b) Convene and chair meetings of the Plenary and of the Governing Council, unless an election has been made to appoint a Chairman of the Plenary on the terms laid down in Section 10.

c) Have a casting vote on all collegiate municipal bodies in which the same participates.

d) Appoint and remove members of the Governing Council, Deputy Mayors and Chairmen of Districts.

e) Issue edicts to record and specify the terms of compliance with regulations in force or appeal to the municipal population on the occasion of special circumstances or events. Issue decrees and instructions.

f) Take necessary and adequate measures in cases of extraordinary and urgent necessity, and immediately account to the Plenary in respect thereof.

g) Exercise senior direction of personnel in the service of the municipal Administration and senior control of the municipal police force.

h) On commencement of mandate resolve on the number, name and powers and functions of the departments into which the municipal Administration is structured, in the framework of basic regulations approved by the Plenary.

i) Exercise judicial and administrative actions in fields within the competence thereof and, in cases of emergency, in matters falling within the competence of the Plenary, in the latter case accounting thereto at the next meeting held for ratification.

j) Ensure the implementation of municipal regulations and laws, as well as resolutions and decisions of executive and administrative bodies, giving particular instructions as appropriate for publication of the latter.

k) Signing agreements.

l) *Ex officio* review and declaration of prejudicial effect of own actions.

m) Authorisation and disbursement of expenses in fields within the competence thereof and acknowledgement and settlement of obligations arising out of the said expense commitments.

n) Giving instructions for payment.

ñ) The appointment of civil servants, employees and temporary workers in the service of the Madrid Municipal Authority.

4. The Mayor may by decree delegate or decentralise the foregoing powers and functions to the Governing Council, its members, other local town councillors and, as the case may be, executive bodies, except for those indicated in paragraphs b), c), d), e) in relation to the issue of edicts, and f). The functions specified in paragraphs a) and h) shall only be capable of delegation to the Governing Council.

Section 15. Deputy Mayors.

The Mayor may appoint Deputy Mayors from among members of the Governing Council who have the status of Town councillor, who shall stand in for him in order of their appointment in cases of vacancy, absence or illness.

Section 16. Governing Council.

1. The Governing Council shall be the executive body of administrative and political management.

2. The Mayor may freely appoint and remove members of the Governing Council, whose number may not exceed one third of the legal number of members of the Plenary in addition to the Mayor.

The Mayor may appoint persons as members of the Governing Council who do not have the status of town councillor, on the terms laid down by basic legislation regulating local government and administration. Their financial rights and benefits shall be as established by the Plenary.

Members of the Governing Council may attend meetings of the Plenary and take part in debates, without prejudice to the powers of the Chairman thereof.

3. The Governing Council shall be politically answerable to the Plenary for its management on a joint and several basis, without prejudice to the direct liability of each of its members in respect of their management.

4. The Secretary of the Governing Council shall be one of the members thereof appointed by the Mayor, who shall draw up minutes of meetings and certify its resolutions.

5. Meetings of the Governing Council shall be secret; nevertheless, public meetings may be held by resolution of the Meeting itself when the nature of the matters to be debated make the same appropriate.

Meetings of the Governing Council may be attended by town councillors who do not belong to the Council and heads of executive bodies, in both cases when expressly convened by the Mayor.

Section 17. Functions of the Governing Council.

1. The Governing Council shall be responsible for:

a) Approving draft ordinances, regulations, including basic regulations, except for regulations governing the Plenary and its Committees, and draft bylaws of autonomous Bodies, public business entities, mercantile companies and foundations.

b) Adopting plans, programmes and directives binding on all executive bodies and undertakings of the Madrid Municipal Authority.

c) Approving the draft budget.

d) Submitting advance planning documents for public consultation, along with approval of urban planning instruments which are not the express responsibility of the Plenary as well as planning management instruments and urban infrastructure plans.

e) Management powers and functions in the field of contracts, concessions and assets, and the appointment of members of contracting boards and their chairmen.

f) The approval of lists of property and rights subject to compulsory purchase and of compulsory purchase plans, including urban plans processed by the joint valuation procedure.

g) The implementation of financial management and in particular the approval of expenses of a multi-year nature, increase in the number of annual payments and modification of percentages of multi-year expenses, and entry into credit operations,, all in accordance with the budget and its implementation bases.

The authorisation and disbursement of expenses in matters falling within its competence and disbursement of expenses previously authorised by the Plenary and acknowledgement and settlement of obligations arising out of the said expense commitments and the validation of credit rights.

The Governing Council shall furthermore be responsible for approving all budget modifications except for those relating to the grant of extraordinary or supplementary credits which shall in all cases be the responsibility of the Plenary.

h) Establishing the organisation and structure of the municipal executive Administration in the framework of basic regulations approved by the Plenary and the appointment and removal of the heads of executive bodies.

i) The exercise of judicial and administrative actions in matters within its competence.

j) *Ex officio* power of review and declarations of prejudicial effect of own actions.

k) The exercise of penalty powers and the grant of licences.

l) The creation, modification and elimination of personal data files.

m) Modifications of the workforce in accordance with the regulation laid down in the bases for implementation of the budget, approving list of positions, remuneration of personnel in

accordance with the budget approved by the Plenary, offers of public employment, terms and conditions of announcements selection and filling of positions, the number and rules governing temporary personnel, the removal of civil servants from the service of the Municipal Authority without prejudice to the provisions of basic legislation in relation to local civil servants with national qualification, the dismissal of employees, disciplinary rules, management of the system of disqualifications and other powers and functions in the field of personnel which are not expressly assigned by this Act to other bodies.

n) Other functions thereof in accordance with current legal provisions and those which State or Madrid Regional legislation assigns to the municipality and which are not allocated to other municipal bodies.

2. The Governing Council may delegate or decentralise the functions listed in the foregoing sub-section except for those stipulated in paragraphs *a), b), c), d), h) and i)* to any of its members, other town councillors and to executive bodies, as the case may be.

Section 18. Regulation of the heads and members of administrative and political management executive bodies.

1. Without prejudice to the specific requirements which may in any event be laid down in each case in order to become head or member of an administrative and political management executive body, be of full age, have the right to vote and stand in municipal elections and not be disqualified from employment or public office by a final judicial judgment.

2. The heads or members of government executive bodies shall be subject to the rules governing disqualification laid down for town councillors in local government legislation and this Act.

CHAPTER II

Public Administration

Section 19. General principles.

1. The Madrid Municipal Authority Administration shall be organised and operate, fully subject to the law and Act, in accordance with the principles of hierarchy, efficacy, functional de-

centralisation, de-concentration, coordination and service to the public.

2. The Administration of the Madrid Municipal Authority, under the senior direction of the Mayor, shall serve the general interests of the city of Madrid with objectivity, carrying out executive and administrative functions thereof in accordance with the provisions of this Act and other applicable provisions.

3. In its relations with other Public Administrations the principles shall apply of information, collaboration, coordination and respect for respective areas of competence. In relations with the public it shall act in accordance with the principles of transparency and participation.

Section 20. Administrative organisation.

Organisation of the Madrid Municipal Authority Administration shall be the responsibility thereof within the framework of the provisions contained in this Act.

Section 21. Executive bodies.

1. The Governing Council may, in the framework of the provisions of the corresponding basic Regulation, create executive bodies within the scope of the Madrid Municipal Authority Administration.

2. The heads of executive bodies shall be appointed on the basis of criteria of professional competence and experience, without prejudice to the provisions of this Act and in accordance with the provisions, as the case may be, of the corresponding basic Regulation.

3. Executive bodies shall be responsible for executing and implementing action plans and decisions taken by the competent administrative and political management executive bodies. In particular, they shall be responsible for promoting the implementation of decisions taken by political bodies, the planning and coordination of activities, evaluation and proposals for innovation and improvement in relation to the services and activities within their area of competence, without prejudice to the special functions which may be delegated to them or attributed to them as their own.

4. The heads of executive bodies shall be subject to the rules governing disqualification laid down by Act 53/1984, of 26 December, on disqualification of Personnel in the Service of Public Authorities and other applicable State or regional legislation.

Section 22. *Districts.*

1. The Plenary shall create Districts, as territorial divisions, with decentralised executive bodies to promote and develop public participation in the management of municipal affairs and their improvement, without prejudice to unity of government and management of the city.

2. The Chairmanship of a District shall in all cases be occupied by a Councillor.

Section 23. *General auditing.*

1. General Auditing shall be the executive body responsible for internal monitoring of financial and economic management of the municipal public sector and accounting functions. The said functions shall be exercised with full independence from the authorities and other entities whose management it monitors.

General Auditing of the Madrid Municipal Authority shall exercise its functions on the terms laid down by the Revised Text of the Act Regulating Local Treasuries promulgated by Royal Legislative Decree 2/2004, of 5 March.

2. The head of General Auditing must be a local authority civil servant with national qualification. The appointment thereof shall be made by the Governing Council and the position filled by the systems laid down by Section 99 of Act 7/1985, of 2 April, regulating the Bases of Local Government and subsidiary regulatory provisions and shall in any event require prior public announcement.

Section 24. *Treasury.*

1. The Treasury shall be the executive body responsible for the management of financial resources of the Madrid Municipal Authority on the terms laid down by the Revised Text of the Act Regulating Local Treasuries.

2. The head of the Treasury must be a local authority civil servant with national qualification. The appointment thereof shall be made by the Governing Council and the post filled by the systems laid down by Section 99 of Act 7/1985, of 2 April, regulating the Bases of Local Government and subsidiary regulatory provisions and in any event require prior public announcement.

Section 25. Madrid Municipal Administrative-Economic Tribunal.

1. The Madrid Municipal Administrative-Economic Tribunal shall have the following functions:

a) Hearing and resolving claims made in relation to the application of taxes and imposition of tax penalties by the Madrid Municipal Authority and public bodies connected with or controlled by it, provided that they relate to matters falling within its competence, or delegated competence when so provided by the resolution or regulation providing for delegation.

b) Hearing and resolving claims made against decisions and processes which directly or indirectly decide on substantive matters in relation to collection actions in respect of public law non-tax income of the Madrid Municipal Authority and of public bodies connected with or controlled by it.

c) If requested by municipal bodies with competence in the tax field, the preparation of studies and proposals in this area and reporting on plans for fiscal ordinances.

2. Decisions issued shall be final in administrative channels and only an contentious-administrative appeal may be brought against the same.

3. Those concerned may however, at their election, previously submit an appeal for reconsideration against the acts stipulated in sub-section 1.a) and b), as regulated by Section 14.2 of the Revised Text of the Act Regulating Local Treasuries promulgated by Royal Legislative Decree 2/2004, of 5 March. An contentious-administrative appeal may be submitted to the body stipulated in this Section against a decision in the said appeal for reconsideration.

4. It shall be made up of an odd number of members, with a minimum of three, appointed by the Plenary with votes in favour by an absolute majority of the members legally making up the

same from amongst persons of acknowledged technical competence and they shall be removed on any of the following grounds:

- a) Own request.
- b) When so resolved by the Plenary with the same majority as for their appointment.
- c) When convicted by a final judgment of an offence involving fraud.
- d) When penalised by final decision for committing a serious or very serious disciplinary infraction.

Only the Plenary may resolve to bring and decide on the corresponding disciplinary process, which shall in all respects be governed by applicable legislation in the field of disciplinary rules governing Municipal Authority civil servants.

5. Its functioning shall be based on principles of technical independence, celerity and cost free. Its composition, powers and functions, organisation and functioning and the procedure for claims shall be governed by regulations promulgated by the Plenary, in all cases in accordance with the provisions of the General Tax Act (*Ley General Tributaria*) and State legislation governing administrative-economic claims, without prejudice to the adaptations which may be necessary based on the scope of operation and functioning of the Tribunal.

6. Claims regulated by this Section shall be deemed to be without prejudice to circumstances in which the law provides for an administrative-economic claim in the State Administrative-Economic Courts.

Section 26. Autonomous tax management executive body.

1. In order to achieve an integrated management of the municipal tax system, governed by the principles of efficiency, sufficiency, celerity and unity of management, the Plenary may create an autonomous tax management executive body responsible for exercising municipal powers and functions of management in the tax field.

2. The Plenary shall determine the powers and functions, organisation and functioning of the said body, which shall be responsible for carrying out the function of collection, respecting

as appropriate the provisions of basic legislation in the field of local government and administration.

3. Collection function shall be carried out by the head of the tax executive body and by civil servants assigned thereto in accordance with provisions which may be laid down.

Section 27. Body for the defence of rights of residents.

1. The Plenary may create a specialised body for defence of the rights of residents in relation to the municipal Administration, whose functioning shall be governed by basic regulations.

2. The said body may monitor the activities of the municipal Administration and must account to the Plenary by annual report on complaints submitted and defects observed in the functioning of municipal services, specifying suggestions or recommendations not accepted by the municipal Administration. It may nevertheless also prepare extraordinary reports when the seriousness or urgency of circumstances so advise.

3. For the purpose of carrying out its functions all municipal bodies of governance and administration shall be under an obligation to collaborate with the said body.

Section 28. Legal Service.

1. Legal assistance to the Mayor, Governing Council and executive bodies, comprising legal advice and representation and defence in proceedings of the Municipal Authority and municipal autonomous bodies and public business entities shall be the responsibility of the Attorneys of the Madrid Municipal Authority forming part of the Legal Department.

2. The Legal Department shall be an executive body whose head shall be appointed and removed by the Governing Council from amongst civil servants of the State, Autonomous Regions or Local Bodies who must have the qualification of graduate in law to join, or local authority civil servant with national qualification.

3. In accordance with the provisions of Section 551.3 of the Judiciary Act, 6/1985, of 1 July, the Municipal Authority and autonomous bodies and local public business entities may appoint a practising lawyer to represent and defend them in proceedings, or entrust the defence and representation thereof solely to a procurator.

4. The Attorneys of the Madrid Municipal Authority shall also be responsible for representation and defence of the Plenary in legal proceedings, on the terms determined by the latter.

5. Attorneys of the Madrid Municipal Authority may give legal advice to and represent and defend local mercantile companies and foundations with a municipal holding in legal proceedings by entry into the appropriate agreement determining the financial compensation payable to the municipal treasury.

6. State Attorneys may represent, defend and advise the Madrid Municipal Authority by entry into the appropriate collaboration agreement on the terms contained in specific legislation governing them, on proposal or prior hearing of the head of the Legal Department.

Section 29. Representation and defence in legal proceedings of public employees and authorities.

On the terms laid down by the Plenary, Madrid Municipal Authority Attorneys may represent and defend authorities, civil servants and employees of the Municipal Authority or of its autonomous bodies and public business entities in legal proceedings, whatever their procedural status, when the proceedings are brought in respect of acts or omissions connected with their position and there is no conflict of interest.

Section 30. Particular procedural aspects.

1. On exercise by Madrid Municipal Authority Attorneys of the functions of legal assistance referred to in the previous sections before courts in any jurisdiction, they shall have the rights, duties and privileges established for legal advice and representation and defence in legal proceedings of the General State Administration.

2. Specifically, the rules contained in Sections 11, 12, 13.1, 14 and 15 of Act 52/1997, of 27 November, on Legal Assistance to the State and Public Institutions and subsidiary legislation shall apply to the Madrid Municipal Authority and dependent public entities.

**TITLE III
Municipal powers and functions****CHAPTER I
General provisions***Section 31. General regime of powers and functions.*

The Madrid Municipal Authority may promote activities of all types and provide all public services which affect the general interests of the public and which are not expressly assigned to other public authorities. In these latter cases the Municipal Authority may engage in complementary activities to those carried out by the said authorities.

Section 32. Municipal powers and functions.

1. The powers and functions of the Madrid Municipal Authority shall consist of their own and those assigned by the General State Administration by delegation or commissioned management.

2. The Madrid Municipal Authority shall also have the powers and functions transferred thereto or delegated by the Madrid Region pursuant to the provisions of Act 3/2003, of 11 March, on implementation of the Local Pact, in conjunction with Sections 138 and following of Act 2/2003, of 11 March, on Madrid Region Local Administration.

Section 33. Own powers and functions.

Own powers and functions shall be all those assigned as such to municipalities in general and to those of large population, whether directly by legislation on local government or by State or regional legislation regulating the different sectors of administrative action.

When the said powers and functions are specifically regulated by this Act they shall be deemed to be assigned on the terms laid down therein.

Section 34. Powers and functions subject to delegation or commissioned management.

1. The assignment of powers and functions on a delegated basis shall take place in accordance with applicable legislation.

2. The commissioned management of certain activities of a material, technical or service nature deriving from the administrative powers and functions of the General State Administration and of the Madrid Region, in accordance with the provisions of applicable State and regional legislation, shall require acceptance by the Plenary and be formalised by agreement entered into for the purpose.

CHAPTER II

Public safety and security

Section 35. Powers and functions in the field of public safety and security.

The Municipal Authority of Madrid shall have the following powers and functions in the field of public safety and security:

1. The protection and custody of authorities, buildings, installations, premises, infrastructures and equipment of a municipal nature, as well as collaboration with competent Authorities in the field of safety and security.

2. In collaboration with competent Authorities, the prevention, maintenance and reestablishment of public safety and security and attempting to ensure the same in relation to those acts which cause social nuisance or damage or injury to property and persons on the public highway.

3. The exercise of powers and functions in the field of administrative and security policing assigned thereto by State legislation, as well as complaints in areas of special administrative policing of State competence.

4. The municipal police shall exercise the powers and functions in the field of judicial policing assigned thereto by State legislation.

Section 36. Participation of the State on the Madrid Local Safety and Security Board.

1. The Madrid Local Safety and Security Board shall exercise the functions assigned thereto by its regulatory legislation.

2. The heads of Security Forces and Bodies of the State which have functional responsibilities in the municipality and, as the case may be, a Judge appointed by the Governing Chamber

of the High Court and a Prosecutor appointed by the Senior Prosecutor of the High Court (*Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia*) may take part as members, with the agreement of the State Administration, in meetings of the Madrid Local Safety and Security Board.

CHAPTER III

Participation in infrastructures of the General State Administration

Section 37. Participation of the Municipal Authority in the management of infrastructures, services and equipment.

1. The Madrid Municipal Authority shall participate, in accordance with the provisions of the corresponding sector legislation, in the management of infrastructures, services and equipment controlled by the General State Administration which directly affect the city of Madrid.

2. The participation of the Municipal Authority of the City of Madrid in the management of infrastructures controlled by the General State Administration shall not prevent the Municipal Authority from exercising its own powers and functions in the field of urban planning, management and discipline, local policing and security, civil protection and fire prevention and extinction, protection of public health, mobility and regulation of vehicular traffic, the environment and any others which are also the responsibility of the Municipal Authority.

3. Participation by the Madrid Municipal Authority in the management of infrastructures, services and equipment of the State shall take place without detracting from the participation therein of the Madrid Region.

CHAPTER IV

Road safety

Section 38. Material scope of application of the powers and functions of the Madrid Municipal Authority in the field of mobility.

The Madrid Municipal Authority shall exercise the powers and functions attributed thereto in the field of traffic, circulation

and road safety on urban roads and on roads which cross the city when the latter have been declared urban roads, and on any spaces open to the free circulation of persons, animals and vehicles, on the terms of this Act and legislation on road traffic, circulation and safety, without prejudice to the powers and functions of other Authorities in the same territorial areas by reason of public safety.

Section 39. Local traffic regulation.

1. The Madrid Municipal Authority shall regulate the different uses of roadways and urban public spaces for traffic and circulation of persons, animals and vehicles and the said traffic and circulation, for the purpose of harmonising different uses, including pedestrian, traffic circulation, parking, sports and leisure, and make them compatible in a balanced manner with ensuring road safety, traffic mobility and fluidity, environmental protection and protection of the integrity of public and private spaces.

2. Ordinances which regulate traffic may define infringements and determine penalties to give effect to their terms in accordance with the principles laid down by legislation.

3. In particular, municipal Ordinances shall, in accordance with the provisions of applicable State and regional legislation:

a) Establish the limits above which emissions are prohibited of electromagnetic interference, noise, gases and other pollutants in or on roadways and urban public spaces.

b) Determine the necessary procedures and instruments to control and penalise, as the case may be, the owners or users of motor vehicles or mopeds which make improper use of acoustic signals, emit fumes or produce noise nuisance with their vehicles.

In cases in which the nuisance is serious or repeated, and without prejudice to imposition as the case may be of the corresponding penalty, precautionary immobilisation of the vehicle or moped may be established by municipal ordinance, and suspension of the permit or licence for the circulation thereof, granting the owner of the vehicle a period of five days to rectify the defects giving rise to the nuisance referred to in the previous paragraph.

Section 40. Powers and functions in the field of road safety.

The Madrid Municipal Authority shall be responsible for preventative administrative policing of road safety on all types of urban road, including traffic regulation, signing and direction and use of roadways, vigilance and protection of public urban street furniture, and traffic regulation signing and preparation of investigative reports and statements in the event of traffic accidents.

These powers and functions shall in any event include:

a) Regulation and control of any of the uses to which roadways and spaces open to the transit of persons, animals and vehicles of all types are susceptible and traffic and circulation over them, in any event guaranteeing the fundamental rights of persons.

Regulation shall include the corresponding signing; limitation and, as the case may be, restriction or prohibition of circulation and parking when appropriate in accordance with the legal system; the obligation to display a document or sticker in a visible position or, as the case may be, the installation of a replacement mechanism to evidence compliance with legal obligations of insurance, authorisation for access to restricted areas and payment of mechanical vehicle tax; and the establishment of positive discrimination measures by reason of disability.

Controls shall include prior subjection to authorisation; the adoption of proportionate preventative measures which may be required by public safety, including immobilisation and removal of vehicles and all types of objects which represent a danger; and carrying out the relevant tests to determine the effects of toxic drugs, narcotics, psychotropic substances or alcoholic beverages in persons which endanger road safety.

b) The approval of road safety and mobility plans and, as the case may be, participation in those plans to be approved by the Madrid Region or General State Administration, in accordance with the provisions of the corresponding sector legislation.

c) Control of stopping and parking on roadways and public spaces and of use in general of the public domain and municipal open spaces. The said function shall include the adoption of vehicle immobilisation or removal measures.

d) The authorisation of sporting events when they pass wholly and exclusively through the urban centre, except for

through roads unless they have the status of urban roadways. It shall further be responsible for vigilance and protection of those which it may authorise.

A report, which shall be mandatory, for the authorisation of sporting events when part of their route passes through the Madrid municipal district.

e) Adoption of the necessary measures to grant parking permits for disabled persons with serious mobility problems or third parties who have been granted the said status and to give effect to the rights deriving therefrom, taking into account the Recommendation of the Council of the European Union of 4 June 1998 on the creation of a parking permit for disabled persons.

f) Penalising infringements of the corresponding legislation in the field of road safety when the said competence is granted thereto.

Section 41. Precautionary measures.

When so required by road safety, and to give effect to regulation of the use of roadways and public spaces, the Madrid Municipal Authority may, on the terms regulated by municipal Ordinance, adopt the following measures, abiding by the principle of proportionality:

1. Immobilisation of all types of vehicle in the following cases:

a) Breach of parking regulations, including those which restrict parking in time, until the driver is identified.

b) Exceeding the maximum permitted levels of gas, fume and noise emissions allowed by municipal ordinances based on vehicle type until the reasons for breaching the said levels have been rectified.

c) Breach of the obligation to apply to register transfer of ownership of a vehicle within the period laid down for the purpose by applicable regulations.

d) Driving without the required insurance cover, without prejudice to the penalising powers and functions of the competent Authority in the field of motor vehicle civil liability and insurance.

2. The removal of vehicles of all types and their subsequent deposit in premises prepared for the purpose, in the following cases:

- a) When they obstruct or hamper circulation.
- b) When they endanger circulation or constitute a risk to persons or property.
- c) Improper parking in restricted parking zones.

Verification of circumstances authorising removal and orders to do so may take place remotely by means of photographs, digital film or other technological means. The guarantees which equipment must comply with by which the said images are captured and transmitted and their inclusion in the administrative record shall be regulated by municipal ordinance and comply with current legislation in the field.

- d) The activity of offering the vehicle itself for sale or carrying out any unauthorised legal transaction in vehicles parked on the public highway.

The expenses of immobilisation or removal of vehicles shall be for account of the owner, and payment or security for payment shall be a prior requirement for lifting the measure.

3. Carrying out tests laid down by regulations to determine the degree of intoxication by alcohol, drugs, psychotropic substances or stimulants in accordance with applicable legislation.

4. Restrictions on the circulation of particular vehicles, the suspension thereof and closure of urban roadways when necessary to preserve safety, the environment or the protection of heritage in accordance with applicable legislation.

5. Agents of the authority may file complaints against the owners of the vehicle if resident in Madrid if in breach of the obligation to evidence, together with the required vehicle documentation, the document evidencing payment or exemption, as the case may be, of or from the motor vehicle tax.

Section 42. Managing the collection of traffic penalties.

Municipal bodies competent to impose traffic penalties may request other Authorities at the same or different level, in accordance with the principle of inter-administrative collaboration and the appropriate agreements, to execute orders made for embargo, without prejudice to the provisions of Section 8 of the Revised Text of the Act regulating Local Treasuries.

Section 43. *Vehicle stickers or documents displayed.*

1. In order to evidence compliance with the obligation to insure vehicles, the Municipal Authority may create and regulate by means of the corresponding Ordinance an adhesive sign for those domiciled in the City of Madrid, to be displayed on the vehicle, without prejudice to the provisions of Section 41.1.d).

2. In respect of vehicles whose owners are under an obligation to pay Mechanical Motor Vehicle Tax in the City of Madrid, an obligation may be imposed by municipal Ordinance to display an adhesive sign in a visible position on vehicles evidencing payment of or exemption from the Tax. The owner or driver of the vehicle must, when required to do so by agents of the authority, in any event evidence compliance with their tax obligations in the field by producing the necessary evidence.

3. The adhesive signs referred to in the foregoing subsections shall be regulated by the corresponding ordinances, if implemented, covering their characteristics and use, their possible replacement by other means, including digital, which permit agents of the authority to immediately verify compliance with the said obligations.

Section 44. *Municipal police auxiliary personnel.*

1. The Municipal Authority may appoint auxiliary personnel to monitor appropriate use of parking areas on public highways and report conduct contrary to the rules regulating their use.

2. Reports made by auxiliary personnel shall, without prejudice to the formalities and procedural requirements required by regulations, be used as evidence to demonstrate the events reported. A picture of the vehicle shall be included in the administrative record, whether by photograph, digital filming or other technological means which enables the complaint made to be supported.

Section 45. *Traffic regulation.*

1. In order to carry out the functions of traffic regulation, signing and direction in the urban centre, in accordance with the provisions of traffic regulations, the Plenary may by resolution create a body of functionaries in accordance with the authorisa-

tion contained in Section 53.3 of Basic Act 2/1986, of 13 March, on Security Forces and Bodies added by additional provision fifteen of Basic Act 19/2003, of 23 December.

2. The said functionaries shall not form part of the Security Forces and Bodies and in exercising their functions shall have the status of agents of the authority subordinate to members of the Madrid Municipal Authority Local Police.

Section 46. Embargo of vehicles.

Collection enforcement procedures shall take place in accordance with generally applicable regulations. The order to be followed in the embargo of property of a debtor shall be excepted from these rules, and a vehicle may be embargoed whose owner is responsible for the penalised infringement subject to penalty immediately after payment of the money in cash or in accounts opened with deposit institutions, without prejudice to subsequently following the order established in the corresponding collection rules.

CHAPTER V

Real estate

Section 47. Removal of encumbrances of real estate of the State.

When encumbrances are removed from real estate located in the City of Madrid owned by the General State Administration and used for the provision of any type of public service including networks of installations and any other infrastructure, it may be transferred by agreement, preferentially to the Municipal Authority of the City of Madrid or to its public entities which have been assigned powers and functions in the field of housing and, as the case may be, to the Madrid Region, provided that it is to be devoted to public use, the construction of publicly owned official protected housing, or use as publicly owned housing for rental. The agreement shall establish the consideration for the disposal, without prejudice to the provisions of Section 145 of Act 33/2003, of 3 November, on the Assets of Public Administrations.

TITLE IV

Legal regime and procedure

Section 48. Procedure for promulgation of legislation falling within the competence of the Plenary.

1. The preparation and approval of ordinances and regulations and bylaws of regional Bodies and public business entities, except for urban planning which shall be governed by its specific legislation, shall comply with the procedure laid down in this section.

2. Initiatives to promulgate legislation falling within the competence of the Plenary shall be the responsibility of:

a) The Governing Council, by forwarding the corresponding bill.

b) Political Groups and Town councillors.

c) A number of citizens equal to or exceeding 10% of the residents of the city, in accordance with the provisions of the applicable basic legislation.

Local taxation matters shall in any event be excluded from public initiative.

3. In the case of bills, the following procedure shall be applied:

a) The Governing Council shall approve the initial bill and submit it for consultation if it affects the legitimate rights and interests of citizens for a period of no less than thirty calendar days.

b) After considering representations made the definitive bill shall be approved by the Governing Council and forwarded to the Plenary for processing in accordance with the provisions of its Basic Regulation. On forwarding it the bill must be accompanied by all representations received and a report on the evaluation thereof.

c) The competent Committee shall report on the bill.

d) The Plenary shall approve the regulation by a single act.

e) The regulation approved by the Plenary shall be published in full in the Official Gazette of the Madrid Region and shall come into force and effect on the day following its publication, unless the regulation itself otherwise provides, the foregoing

without prejudice to publication thereof in the Madrid City Gazette (*Boletín de la Ciudad de Madrid*).

f) Without prejudice to the foregoing, notice of approval of the regulation shall be given to the General State Administration and to the Administration of the Madrid Region.

4. In the case of proposals by political groups and Town councillors, the procedure established in the foregoing subsection shall be followed, with the following particular features:

a) The proposal, accompanied by a report signed by the author thereof, shall be forwarded to the corresponding Committee for report.

b) After report by the Committee, if the proposal affects the legitimate rights and interests of citizens it shall be subjected to a consultation process for a period of not less than thirty calendar days.

c) The competent Committee shall make proposals on the resolution of representations made to the Plenary and approval of the resulting regulation by a single act.

5. The submission of amendments by Town councillors and their processing in Committee and the Plenary shall comply with the provisions of the Basic Regulation of the Plenary.

6. All proposals or amendments which involve a budgetary increase in credits or reduction in income for the financial year in progress shall require the agreement of the Governing Council for the processing thereof.

Section 49. Procedure for approval of the Budget.

1. An initiative to approve the general Budget of the Madrid Municipal Authority shall be the exclusive responsibility of the local governing Council.

2. The general Budget of the Madrid Municipal Authority shall be processed in accordance with the ordinary procedure laid down in the foregoing section for legislative bills, with the particular features established in this section, which shall be developed by Basic Regulation of the Plenary.

3. The Draft Budget shall be explained to the public by announcement in the Official Gazette of the Madrid Region for fifteen calendar days during which persons concerned may examine it and make representations.

For these purposes the following shall have the status of persons concerned:

- a) Residents in Madrid.
- b) Those directly affected, even if they do not reside in the municipality of Madrid.
- c) Professional associations, official chambers, unions, associations and other entities legally constituted to safeguard professional or economic and residents' interests when they act in protection of such interests.

4. Persons concerned may make allegations in the following cases:

a) As a result of omission of the necessary credit to comply with enforceable obligations of the municipality pursuant to legal provisions or any other legitimate title.

b) Because income is manifestly insufficient in relation to budgeted expenditure, or the latter is insufficient for the requirements for which it is provided.

5. The Draft Budget shall be forwarded to the Plenary prior to 1 November.

6. Amendments involving modification of income shall require the agreement of the Governing Council for processing.

7. Amendments affecting credits for expenses must be submitted by setting off increases and reductions of credits within the Budgetary Section to which they relate.

Section 50. Notification.

1. Notification of acts, resolutions and decisions adopted by the different bodies of the Madrid City Municipal Authority may be entrusted to ancillary municipal personnel authorised for the purpose.

2. Notification given by the said ancillary municipal personnel shall have the effect of certification of their receipt or rejection by the recipient.

3. The Municipal Authority must in any event procure and promote receipt of notifications by citizens of procedures which affect them through technological, computerised or telecommunications media.

Section 51. *Madrid City Gazette and edict board.*

1. Without prejudice to the obligation contained in legislation and regulations regarding the publication of acts and provisions in the corresponding official journals, the Madrid City Municipal Authority may provide its own Gazette in electronic or computerised format.

2. The edict board of the Madrid City Municipal Authority may also be implemented by electronic or computerised means. In this event, free access to it by citizens must be ensured by installing terminals with access to the edict board in all District Boards and municipal offices.

Section 52. *Measures for complying with legality.*

1. The Mayor and Governing Council may impose coercive fines of up to 3,000 euros as a means of enforcing its acts, repeated for as many periods of fifteen days as may be sufficient to comply with matters ordered, in the following cases:

a) Personal acts in which direct compulsion of the person under an obligation is not appropriate.

b) Acts in which, compulsion being appropriate, the Administration does not consider it desirable.

c) Acts whose enforcement may be entrusted to another person by the person under an obligation.

2. The coercive fine shall be independent of the penalty or penalties which may be imposed as such and be compatible with them.

The circumstances stipulated in the first sub-section of this section may include establishment by municipal Ordinance of specific cases in which a coercive fine may be imposed, the scaling of the amount thereof based on the seriousness of the breach, without in any event exceeding the maximum limit of 3,000 euros and annual updates thereof in accordance with annual movements in the Consumer Price Index.

3. In imposing penalties for breach of duties, prohibitions or restrictions contained in ordinances by grounded decision of the body deciding on the penalty process, the financial penalty may be replaced by work for the benefit of the community, mandatory attendance at training courses, individual sessions or any

other alternative measure which has the purpose of making the infringer more aware of the rules of conduct in urban space or reparation of moral damage to victims.

Section 53. *Conclusion of administrative channels.*

As well as those laid down by Section 52.2 of Act 7/1985, of 2 April, regulating the Bases of Local Government, acts issued by municipal bodies when they exercise powers and functions attributed by the Mayor and Governing Council by the technique of decentralisation laid down in this Act shall bring an end to administrative channels.

Section 54. *Forwarding resolutions.*

The Madrid Municipal Authority shall forward to the General State Administration and to that of the Madrid Region a copy of resolutions passed by the Plenary within the periods and in the manner determined by regulations. Resolutions passed by municipal governing bodies and executive bodies shall be forwarded to the said Administrations at their prior request.

Section 55. *Public certification functions.*

The functions of public certification of acts and resolutions of individual bodies and other functions of public certification, other than those attributed to the General Secretary of the Plenary, the Secretary of the Governing Council and the Secretary to the Board of Directors of public business entities, shall be exercised by the heads of executive bodies or functionaries of the Madrid City Municipal Authority as determined by the Governing Council.

Additional provision one. *Constitution of the Capital Status Inter-Administrative Commission.*

Within a period of six months from entry into force of this Act, the Capital Status Inter-Administrative Commission shall be constituted as provided in Section 5. The State, through the Ministry of Public Administration, shall summon the remaining Authorities within the said period for the purpose of approving the internal regulations of the Commission.

Additional provision two. *Municipal powers and functions and sector legislation.*

1. Sector legislation may not alter the internal distribution of powers and functions made by this Act between the Plenary, the Mayor and the Government Council.

2. The powers and functions which sector legislation attributes to the different bodies of the Madrid Municipal Authority on entry into force of this Act shall be exercised in accordance with the distribution of powers and functions laid down herein.

Additional provision three. *Underground installation of public service and general interest networks.*

1. All installations of public service supply and general interest networks which run through the municipal district must be underground and their location and layout comply with urban planning and, as the case may be, Ordinances governing use of the municipal public domain. Only in the event of urgency or technical or financial impracticability may the Municipal Authority authorise their surface or overhead installation, without prejudice to the planning powers and functions of the Madrid Region.

2. Installations in existence at the time of entry into force of this Act must be buried when so provided by urban planning or the corresponding Ordinances governing use of the municipal public domain within the periods established thereby. Orders to place them underground shall only give rise to compensation in the amount of the value of the existing installations which cannot be considered to have been depreciated at the time when they must be so placed underground.

Additional provision four. *Specific regulation.*

The management and disposal of real estate, installations, telecommunications and technical services of the Ministry of Defence and its public bodies, located in the city of Madrid, shall be governed by specific legislation applicable thereto.

Additional provision five. *Parking permits for disabled persons.*

Parking permits for persons with disability issued by the municipal authorities in accordance with the model established in

Council Recommendation 98/376/EC, of 4 June 1998, on the creation of a parking permit for disabled persons, shall be valid throughout the territory of the State independently of the municipality of origin of the holder.

Additional provision six. *Tax on the Increase in Value of Urban Land.*

The Land Registry shall not register any document which contains an act or contract determining tax obligations in respect of the tax on Increase in Value of Urban Land in the Madrid Municipal Authority without prior evidence in accordance with the provisions of regulations of having submitted the self-assessment or corresponding return or communication, as the case may be.

The Madrid Municipal Authority may by Basic Regulation adapt the names of the necessary bodies provided for in this Act to those established in basic legislation on local government.

Transitional provision one. *Adaptation to the provisions of this Act.*

The Full Madrid Municipal Authority shall have a period of six months from entry into force of this Act to approve the adaptation of its organisation to the provisions hereof. Until the said provisions are approved, the provisions shall remain in force which regulate the said matters at the time of entry into force of this Act.

Transitional provision two. *Disqualification regime.*

Disqualification shall be applicable to members of the Madrid Municipal Authority as laid down in Section 2.4 of Act 12/1995, of 11 May, on the Disqualification of members of National Government and Senior Officers of the General State Administration.

The said regime shall remain in force and effect until the date of entry into force of the new Act regulating the Bases of Government and Local Administration from when the regime provided for therein shall be applicable.

Sole repealing provision. *Legislative repeal.*

Sections of the Text of the special Act for the Municipality of Madrid promulgated by Decree 1674/1963, of 11 July, which have not been expressly repealed by provisions prior to this Act, shall be rendered without effect.

Final provision one. *Competence to promulgate.*

This Act is promulgated pursuant to the provisions of Section 6 of Basic Act 3/1983, of 25 February, on the Statute of Autonomy of the Autonomous Region of Madrid and pursuant to the following powers:

149.1.4 of the Constitution: Additional provision four.

149.1.6 of the Constitution: Section 30.

149.1.8 of the Constitution: Additional provision six.

149.1.18 of the Constitution: Sections 1 to 29, 31 to 34, 47 to 55, additional provisions one, two and three.

149.1.20, 21 and 24 of the Constitution: Section 37.

149.1.21 of the Constitution: Sections 38 to 46 and additional provision five.

149.1.29 of the Constitution: Section 35 and 36.

Final provision two. *Entry into force.*

This Act shall come into force and effect twenty days after publication thereof in the «Official State Gazette».

ÍNDICE ANALÍTICO

A

ACTOS

- Ejecución forzosa, art. 52.1
- Fe Pública, art. 55
- Fin de la vía administrativa, arts. 25.2 y 53
- Notificación, art. 50
- Publicación, art. 51
- Revisión
 - Pleno, art. 11.1.*m*)
 - Alcalde, art. 14.3.*l*)
 - Junta de Gobierno, art. 17.1.*j*)

ACUERDOS

- Adopción por el Pleno, arts. 9.3 y 11.2
- Certificación
 - Pleno, art. 13.1.*b*)
 - Junta de Gobierno, art. 16.4
- Comunicación y publicación de Acuerdos plenarios, arts. 13.1.*d*) y 51
- Delimitación y alteración de términos municipales, art. 11.1.*e*)

Fe pública, art. 55

Notificación, art. 50

Participación en organizaciones supramunicipales, art. 11.1.*f*)

Remisión, arts. 13.1.*g*) y 54

ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Principios Generales, arts. 2.2 y 19

ALCALDE

- Asistencia jurídica, art. 28.1
- Atribuciones, arts. 14.3 y 14.4

Definición

- Como órgano ejecutivo de dirección política y administrativa, arts. 7.*b*) y 14.1

Fuero, art. 8

Miembro del Pleno, art. 9.1

Régimen retributivo, art. 11.1.*n*)

Representación, art. 14.2

ASESORÍA JURÍDICA

Funciones, art. 28.1

Nombramiento y separación del titular, art. 28.2	Reglamento interno, art. 6.2 y disposición adicional primera
Representación y defensa en juicio	
• Del Ayuntamiento, Organismos autónomos y Entidades públicas empresariales, art. 28.1 y 28.3	COMPETENCIAS MUNICIPALES
• De autoridades y empleados públicos, art. 29	Régimen general, art. 31
• Del Pleno, art. 28.4	Clases, art. 32
Letrados del Ayuntamiento, arts. 28.1, 28.4, 28.5 y 29	Propias, arts. 33 y 37.2
Abogados del Estado, art. 28.6	Delegadas y encomienda de gestión, arts. 11.1.k) y 34
Especialidades procesales, art. 30	Distribución interna, disposición adicional segunda
AUTONOMÍA MUNICIPAL, art. 2	Bienes inmuebles, art. 47
	Movilidad y ordenación del tráfico, arts. 38, 39 y 45
	Seguridad pública, art. 35
	Seguridad vial, art. 40

B

BANDOS, arts. 14.3.e) y 14.4

BOLETÍN DE LA CIUDAD DE MADRID, art. 51.1

C

COMISIONES DEL PLENO

- Atribuciones, art. 12
- Composición, art. 9.2
- Delegaciones del Pleno, art. 11.3
- Secretaría, art. 13.2

COMISIÓN INTERADMINISTRATIVA DE CAPITALIDAD

- Constitución, art. 5 y disposición adicional primera
- Composición, arts. 5.2 y 6.2
- Presidencia, art. 6.1

CONCEJALES

Asistencia a las sesiones de la Junta de Gobierno, art. 16.5

Definición

- Como órgano ejecutivo de dirección política y administrativa, art. 7.b)

Delegación o desconcentración de competencias

- Del Alcalde, art. 14.4
- De la Junta de Gobierno, art. 17.2

Fuero, art. 8

Iniciativa para la aprobación de normas, art. 48.2.b)

Miembros de la Junta de Gobierno, art. 16.2

Miembros del Pleno, art. 9.1

Miembros de las Comisiones, art. 9.2

Presentación de enmiendas, art. 48.5

Presidencia del Distrito, art. 22.2

Proposiciones, art. 48.4

Régimen retributivo, art. 11.1.*ñ*)

Registro de intereses, art. 13.1.*f*)

Tenientes de Alcalde, art. 15

CONVENIOS

Aceptación de encomiendas de gestión, art. 34.2

Firma de convenios, art. 14.3.*k*)

Cobro de las sanciones en materia de circulación, art. 42

Desafectación de inmuebles del Estado, art. 47

D

DEBATES, arts. 9.2, 10.3, 13.1.*c*) y 16.2

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS VECINOS, arts. 11.1.*c*) y 27

DELEGACIÓN O DESCONCENTRACIÓN DE COMPETENCIAS

Del Alcalde, art. 14.4

De la Junta de Gobierno, art. 17.2

Del Pleno, art. 11.3

DISTRITOS

Regulación, art. 11.1.*c*)

Creación, art. 22.1

Presidencia, arts. 14.3.*d*) y 22.2

E

ENCOMIENDA DE GESTIÓN, arts. 11.1.*k*), 32.1 y 34.2

ENMIENDAS, arts. 48.5, 48.6, 49.6 y 49.7

ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES

Creación, art. 11.1.*l*)

Asistencia jurídica y representación y defensa en juicio Arts. 28.1, 28.3 y 29

Estatutos, arts. 11.1.*l*), 17.1.*a*) y 48.1

F

FE PÚBLICA, art. 55

FUERO, art. 8

FUNDACIONES

Estatutos, arts. 11.1.*l*) y 17.1.*a*)

Representación y defensa en juicio, art. 28.5

G

GRUPOS POLÍTICOS

Integración en las Comisiones del Pleno, art. 9.2

Iniciativa para la aprobación de normas, art. 48.2.*b*)

Proposiciones, art. 48.4

I

INCOMPATIBILIDADES

Gestión del régimen de incompatibilidades, art. 17.1.*m*)

Titulares o miembros de órganos ejecutivos de gobierno, art. 18.2

Titulares de órganos directivos, art. 21.4	Secretaría de la Junta de Gobierno, art. 16.4
Concejales, disposición transitoria segunda	
INICIATIVA CIUDADANA, art. 48.2.c)	JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD DE MADRID
	Funciones, art. 36.1
	Vocales, art. 36.2
	M
	MEDIDAS CAUTELARES
	Inmovilización de vehículos, art. 41.1. ^a
	Retirada de vehículos, art. 41.2. ^a
	Pruebas intoxicación alcohólica o estupefacientes, art. 41.3. ^a
	Limitación de la circulación, art. 41.4. ^a
	Falta de pago del Impuesto sobre vehículos, art. 41.5. ^a
	MOVILIDAD
	Competencias, arts. 2.3 y 37.2
	Ámbito material de aplicación, art. 38
	Ordenación del tráfico, arts. 39 y 45
	Seguridad vial, art. 40
	MULTAS COERCITIVAS , art. 52.1
	O
	ORDENANZAS
	Aprobación, arts. 11.1.d) y 48.1
	Aprobación de proyectos, arts. 17.1.a) y 48.3.a)
	Distintivo de vehículos, art. 43
	Multas coercitivas, art. 52.2

Utilización del dominio público,
disposición adicional tercera

Régimen retributivo, art. 11.1.*ñ*)

ORGANISMO AUTÓNOMO DE GESTIÓN TRIBU- TARIA, art. 26

ORGANISMOS AUTÓNO- MOS

Creación, art. 11.1.*l*)

Asistencia jurídica, art. 28.1

Estatutos, arts. 11.1.*l*), 17.1.*a*) y
48.1

Representación y defensa en jui-
cio, arts. 28.3 y 29

ORGANIZACIÓN ADMI- NISTRATIVA

Adaptación de la denominación de
los órganos necesarios, disposi-
ción adicional séptima

Adaptación de su organización
administrativa, disposición
transitoria primera

Regulación, arts. 11.1.*c*) y 20

Número, denominación y com-
petencias de las áreas, art.
14.3.*h*)

Organización y estructura de la
Administración municipal eje-
cutiva, art. 17.1.*h*)

ÓRGANOS DIRECTIVOS

Asistencia a las sesiones de la Junta
de Gobierno, art. 16.5

Asistencia jurídica, art. 28.1

Creación, art. 21.1

Funciones, art. 21.3

Nombramientos y cese, arts.
17.1.*h*) y 21.2

P

PARTICIPACIÓN CIUDA- DANA, arts. 11.1.*c*), 19.3 y 22.1

PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LA GESTIÓN DE IN- FRAESTRUCTURAS DEL ESTADO, art. 37

PATRIMONIO

Desafectación de inmuebles del
Estado, art. 47

Gestión del patrimonio, art. 17.1.*e*)

Del Ministerio de Defensa, dispo-
sición adicional cuarta

Protección del patrimonio, art.
41.4.^a

PERSONAL

Superior dirección del Alcalde, art.
14.3.*g*)

Creación de escalas, subescalas y
clases de funcionarios, art.
11.1.*p*)

Atribución de la condición de
agentes de autoridad, art.
11.1.*p*)

Nombramiento del personal fun-
cionario, laboral y eventual, art.
14.3.*ñ*)

Modificaciones de plantilla, art.
17.1.*m*)

Relaciones de puestos de trabajo,
art. 17.1.*m*)

Retribuciones, art. 17.1.*m*)

Oferta de Empleo Público, art. 17.1.*m*)
 Selección y provisión, art. 17.1.*m*)
 Número y régimen del personal eventual, art. 17.1.*m*)
 Separación del servicio, art. 17.1.*m*)
 Despido del personal laboral, art. 17.1.*m*)
 Régimen disciplinario, arts. 17.1.*m*) y 25.4
 Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, arts. 13.1, 17.1.*m*), 23.2, 24.2 y 28.2
 Personal auxiliar de policía municipal, art. 44
 Personal auxiliar para la práctica de notificaciones, art. 50.1 y 2
 Cuerpo de funcionarios para la ordenación del tráfico, art. 45

PLENO

Atribuciones, art. 11
 Constitución, art. 9.3
 Convocatoria, arts. 9.3, 10.1, 10.3, 13.1.*c*) y 14.3.*b*)
 Definición

- Como órgano deliberante de representación política, arts. 7.*a*) y 9.1

 Funcionamiento, art. 9.3
 Representación y defensa en juicio, art. 28.4
 Presidencia del Pleno, arts. 10 y 14.3.*b*)
 Secretaría General del Pleno, art. 13.1
 Vicepresidencia del Pleno, art. 10.1 y 10.2

PRESUPUESTO

Aprobación del proyecto, art. 17.1.*c*)
 Procedimiento de aprobación, arts. 11.1.*h*), 11.3 y 49

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE NORMAS

Iniciativa, art. 48.2
 Tramitación de proyectos, art. 48.3
 Tramitación de proposiciones, art. 48.4

R

REGISTRO DE INTERESES, art. 13.1.*f*)

REGLAMENTOS

Aprobación y modificación, art. 11.1.*d*)
 Aprobación de los proyectos, art. 17.1.*a*)
 Reglamento Orgánico

- Aprobación de los proyectos, art. 17.1.*a*)
- Aprobación y modificación, art. 11.1.*c*)
- Determinación de los órganos ejecutivos de dirección política y administrativa, art. 7.*b*)
- Regulación del Pleno, art. 9.3
- Creación de órganos directivos, art. 21.1
- Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid, art. 25.5

- Órgano para la defensa de los vecinos, art. 27.1
- Presupuesto, art. 49.2

S**SANCIONES**

Ejercicio de la potestad sancionadora, art. 17.1.*k*)

Sanciones tributarias, art. 25.1.*a*)

Sanciones en materia de tráfico, arts. 39.2 y 39.3

Independencia de las multas coercitivas, art. 52.2

Trabajos en beneficio de la comunidad, art. 52.3

SEGURIDAD PÚBLICA, arts. 4.*a*) y 35**SESIONES**

De la Junta de Gobierno

- Convocatoria y Presidencia, art. 14.3.*b*)
- Carácter secreto, art. 16.5
- Excepción, art. 16.5
- Asistencia, art. 16.5

De la Junta Local de Seguridad de Madrid, art. 36.2

Del Pleno

- Convocatoria y Presidencia, arts. 13.1.*c*) y 14.3.*b*)
- Carácter público, art. 9.2
- Intervenciones, arts. 9.1 y 16.2

SOCIEDADES MERCANTILES

Creación, art. 11.1.*l*)

Estatutos, arts. 11.1.*l*) y 17.1.*a*)

Asesoramiento jurídico y representación y defensa en juicio, art. 28.5

T**TABLÓN DE EDICTOS**, art. 51.2**TENIENTES DE ALCALDE**

Definición

- Como órgano ejecutivo de dirección política y administrativa, art. 7.*b*)
- Funciones, art. 15
- Nombramiento y cese, arts. 14.3.*d*) y 15

Fuero, art. 8

TESORERÍA

Funciones, art. 24.1

Nombramiento, art. 24.2

TRÁMITE DE ALEGACIONES

Presupuesto, art. 49.3 y 4

Proyectos, art. 48.3.*a*) y *b*)

Proposiciones, art. 48.4.*b*) y *c*)

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MADRID

Atribuciones, art. 25.1

Composición, art. 25.4

Funcionamiento, art. 25.5

Regulación, arts. 11.1.*c*) y 25.5

Recurso, art. 25.3

Resolución, art. 25.2

U**URBANISMO**

Aprobación del planeamiento, arts. 11.1.*j*, 11.2, 11.3, 17.1.*d* y 48.1
Instrumentos de gestión urbanística, arts. 17.1.*d*) y *f*) y 37.2
Concesión de licencias, art. 17.1.*k*)
Disciplina urbanística, arts. 17.1.*k*) y 37.2
Instalación subterránea de las redes de servicios públicos y de interés general, disposición adicional tercera

V**VEHÍCULOS**

Distintivo de los vehículos, art. 43
Embargo de los vehículos, art. 46
Impuesto sobre vehículos, arts. 41.5.^a y 43.2

VOTACIONES

Mayorías absoluta y simple, art. 11.2
Asistencia del Presidente del Pleno, art. 13.1.*c*)
Voto de calidad, art. 14.3.*c*)